

XIV INFORME ANUAL

***DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA
PROVINCIA DE RIO NEGRO***

PERIODO 2008 - 2009



**Defensora del Pueblo
Dra. Ana Piccinini**

**Defensor Adjunto
Dr. Ignacio Gandolfi**

CONTENIDO

- **INTRODUCCION**
- **INDICE TEMATICO**
- **DESARROLLO DE INFORME ANUAL**

ANEXOS

1. RESOLUCIONES MAS DESTACADAS – PRESENTACIONES JUDICIALES - OTRAS

2.- INFORME AREA DE PRENSA

- **Palabras a la prensa**
- **Sobre el sitio web**
- **Estadísticas**
- **Imágenes**
- **Recortes periodísticos**

3.- INFORME CONTABLE

- **Ejecución del presupuesto**
- **Formulario y comprobantes**
- **Resoluciones Tribunal de Cuentas**

INTRODUCCION.

Señor Presidente, Sres. Legisladores:

Como ya lo he manifestado, esta gestión de la Defensoría del Pueblo de Río Negro se ha propuesto jerarquizar el rol del Organismo de control a través de un accionar eficiente y certero que contribuya a hacer realidad los derechos de los habitantes rionegrinos frente a los desbordes o el accionar deficiente de la Administración Pública.

A partir de la sanción de la Ley 3.635 (modificatoria de la Ley 2.756), a través de la cual se otorga al Defensor del Pueblo la defensa en juicio de los derechos difusos o colectivos, esta Defensora del Pueblo ha asumido con convicción la defensa los derechos de incidencia colectiva.

Algunos pronunciamientos judiciales nos han reconocido la “Legitimación Activa” para actuar en tal sentido, otros, sin una línea coherente de razonamiento, han dicho que no y se encuentran en las instancias de impugnación correspondientes.

De cualquier manera anticipo que esta Defensora del Pueblo va a seguir promoviendo las acciones administrativas y judiciales pertinentes, en procura del reconocimiento y efectivo cumplimiento de los derechos que involucren intereses colectivos de la sociedad rionegrina.

A lo largo de este ejercicio que termina, hemos vuelto a priorizar la calidad de las intervenciones. Muchos requerimientos, fueron atendidos a través de un trámite sencillo e informal como es la gestión personalizada, permitiendo evacuar consultas de manera rápida y brindar orientación adecuada.

Renovamos esfuerzos por ser expeditivos y eficaces en la solución de los problemas, evitando trámites burocráticos innecesarios. Se ha acortado camino en varias oportunidades a la hora de procurar la colaboración de los organismos involucrados en los reclamos. También se han derivado casos a los organismos pertinentes. Los datos estadísticos siguen reflejando un accionar eficiente y buenos resultados.

Todas las intervenciones reflejan el desarrollo de un accionar perfectamente ajustado a Derecho, inobjetable desde la legalidad. A tal fin hemos sido responsables, prudentes, estudiosos y comprometidos en cada una de nuestras presentaciones. Por eso la imagen de la Defensoría del Pueblo ha crecido en credibilidad y confianza.

También hemos sostenido una permanente vocación y colaboración en la construcción de políticas públicas de promoción y protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución. Ello con miras al mejoramiento de la calidad de vida de la población rionegrina.

Sin embargo, muchas de las observaciones efectuadas para corregir las deficiencias, los errores, las omisiones, han sido interpretadas como ataques a la gestión de gobierno, atentando ello contra el cumplimiento de los deberes que al Defensor del Pueblo le han impuesto la Constitución y la Ley.

La reacción fue, en la mayoría de los casos, de rechazo, de resistencia, de desprestigio, con un marcado menosprecio de nuestra tarea, habiendo llegado inclusive a la obstrucción o al entorpecimiento de las investigaciones en curso, situación que coloca a los funcionarios responsables al borde de la ilegalidad.

Esta Defensora y su equipo de trabajo han hecho, sugerencias y recomendaciones, solicitudes de informes y de documentación. Sin embargo, se ha evidenciado que no todos los Organismos del Estado Provincial están dispuestos a colaborar con su misión de control. Todo lo contrario.

En algunos Ministerios hemos podido observar que la intención de respuesta, es casi nula ante la demanda del Organismo de Control.

El discurso político contrasta con el accionar de esos Ministerios. Hay una negación de la realidad. Ello es preocupante. Por poner un ejemplo, la cuestión de la salud es fundamental, y pareciera que los únicos que hablan de crisis hospitalaria son la Defensora del Pueblo y los trabajadores de la salud.

Sin embargo, nuestro trabajo se nutre con los datos incontrovertibles que nos brinda la interacción diaria con los ciudadanos de nuestra provincia. Pero esta interacción no existe con el Gobierno Rionegrino porque su actitud es cerrada, evidentemente de espaldas a la sociedad.

Lo más grave de todo, es que se queda sin respuesta la sociedad, la gente, el Pueblo de Río Negro.

La perseverancia caracteriza nuestra gestión, seguiremos trabajando con el mismo objetivo, con las mismas energías y con la misma convicción.

Espero que en el año 2010 nuestras recomendaciones y sugerencias sean vistas y oídas, que se interprete cuáles son las atribuciones del Defensor del Pueblo y en qué consiste el llamado "Deber de Colaboración" que impone la ley. Me pongo una vez más a disposición para contribuir en el

diseño y ejecución de políticas activas que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los rionegrinos.

Seguiremos haciendo uso de la Iniciativa Parlamentaria a través de la presentación de proyectos de ley, destacando, una vez mas, que el accionar de la Defensoría del Pueblo constituye una valiosa fuente de información parlamentaria, ya que en base a sus informes (anuales o especiales), los legisladores pueden observar que es lo que falla en la administración de la cosa pública, proponiendo las modificaciones pertinentes a través de la legislación.

Agradezco la colaboración de todos, particularmente de mi equipo de trabajo, por su profesionalismo y el compromiso enorme con el Sistema Republicano y las Instituciones Democráticas.

Saludo al Señor Presidente muy atentamente, y por su intermedio a los Señores Legisladores.

INDICE TEMÁTICO INFORME ANUAL 2009

1. SALUD PÚBLICA

1. CRISIS HOSPITALARIA
2. RESIDUOS PATÓGENOS
3. OBRA SOCIAL PROVINCIAL IPROSS
4. PAMI
5. PROFE (Programa Federal de Salud)
6. SITUACION DE AFILIADOS DE LA OBRA SOCIAL BANCARIA

2. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

1. AGUA POTABLE Y CLOACAS
2. NORMALIZACIÓN DEL CONSORCIO DE RIEGO
3. GAS
4. ELECTRICIDAD
5. REVISIÓN TARIFARIA
6. TELEFONÍA FIJA
7. TELEFONÍA CELULAR
8. SERVICIO DE INTERNET
9. SERVICIOS BANCARIOS
10. DEFENSA DEL CONSUMIDOR

3. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

4. BECAS DE ESTUDIO- BOLETO ESTUDIANTEL Y TRANSPORTE

1. PROGRAMA PROVINCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS/TERCIARIAS.
2. BOLETO ESTUDIANTEL

5. DISCRIMINACIÓN

6. EDUCACIÓN

1. SISTEMA EDUCATIVO
2. CONFLICTO DOCENTE.
3. DENUNCIA REALIZADA POR LA ASAMBLEA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.

7. DERECHO DE FAMILIA

1. POLÍTICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
2. POLÍTICAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

3. SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE PROMOCIÓN FAMILIAR DE ROCA.
4. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CENTROS DE CONTENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (CAINA)
5. GUARDAS DE HECHO
6. DERECHO A LA IDENTIDAD

8. TRATA DE PERSONAS

9. TIERRA Y VIVIENDAS

1. IPPV
2. BARRIO SANTA CLARA
3. TIERRAS FISCALES
4. RECLAMO DE LA COMUNIDAD MAPUCHE

10. TEMAS PREVISIONALES

1. SEGURO DE VIDA DE I.A.P.S. PARA MAYORES DE 80 AÑOS
2. SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE ANSES EN ZONAS RURALES Y MEJORAS EN BOCAS DE PAGOS
3. OCHENTA Y DOS POR CIENTO MÓVIL (82 %)
4. HONORARIOS DE GESTORES, Y ABOGADOS POR TRÁMITES PREVISIONALES
5. DEMORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AUMENTOS POLICIALES AL SECTOR PASIVO
6. LA EMERGENCIA FINANCIERA Y EL DECRETO 80/09 DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
- 7.- CONFLICTO EMPLEADOS MUNICIPALES DE GRAL. ROCA

11. POLICIA DE RIO NEGRO

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA POLICIA
2. EL CASO ORMEÑO. OTROS CASOS
3. PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.
4. JÓVENES EN COMISARIAS

12. CASO FLAVORS

13. RECEPTORÍA DE VILLA REGINA

SALUD PÚBLICA

CRISIS HOSPITALARIA PROVINCIAL

En el marco de los autos caratulados “S/ Crisis hospitalaria provincial” (Expte N° 1121/09 “DPRN”), con fecha 22/10/09 cursamos nota al Gobernador de la provincia solicitándole “... *Su intervención en forma PERSONAL, atento el hecho de encontrarnos en medio de una situación DE CRISIS, que requiere la adopción de medidas urgentes, en atención a la responsabilidad del Estado y las obligaciones a su cargo...*”.

A través de dicha misiva recordamos al Mandatario todas las acciones que la actual Defensora del Pueblo viene desarrollando desde el inicio de su gestión, particularmente la preocupación por la sistemática falta de respuesta a Recomendaciones formuladas a la Sra. Ministra de Salud.

Con fecha 19 de Octubre de 2009 participamos de una reunión en el Hospital de Cipolletti, con médicos y trabajadores hospitalarios, en la que se evaluó en forma completa y circunstanciada CADA UNO DE LOS GRAVES aspectos que integran la actual crisis hospitalaria y sanitaria en la Provincia de Río Negro, circunstancia que resulta de público y notorio conocimiento.

Los principales aspectos de la reunión fueron las deficiencias en infraestructura edilicia y la falta de mantenimiento, la carencia de instrumental, insumos, aparatología básica, la falta de recurso humano en las distintas especialidades, todo lo cual había sido oportunamente planteado en Allen y en otras localidades de la Provincia, a través de distintos petitorios elevados al Gobierno.

La Salud Pública ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión al frente de la Defensoría del Pueblo. Prueba de ello son los diagnósticos elaborados y puestos en conocimiento de la Legislatura en los sucesivos informes anuales, a partir del relevamiento efectuado en casi la totalidad de los hospitales rionegrinos, mereciendo destacarse el dictado de dos (2) Resoluciones – Recomendaciones, relativas a la situación de los Hospitales de Viedma y de San Carlos de Bariloche. La situación de los hospitales era en aquel momento deplorable.

Ya en aquella oportunidad resolvimos: “*RECOMENDAR a la Señora Ministra de Salud de la Provincia de Río Negro, Dra. Cristina Liliana Uría, intervenga en forma urgente a los efectos de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales vigentes, disponiendo y ordenando las medidas conducentes para la correcta prestación del servicio de salud...*”.

Las recomendaciones no tuvieron respuesta como así tampoco los reiterados pedidos de informe solicitados a la Cartera de Salud en distintos aspectos que involucran la salud de los rionegrinos, pudiendo mencionar a modo de ejemplo el pedido de informe realizado el pasado 09/09/09 en los autos caratulados "S/ Reclamo por falta de servicio de pediatría en el Hospital de S.A.O" (Expte. Nº 923/09 y Act. Nº 731/09). Respecto del cual no se recepcionó ninguna respuesta a pesar de estar toda la comunidad sanantoniense preocupada y expectante...

Promovimos sendas investigaciones penales por el fallecimiento de tres personas en los hospitales de General Roca (dos pacientes) y San Antonio Oeste (un niño), a instancia de denuncias efectuadas por los propios trabajadores, relacionadas con irregularidades o falencias en los respectivos nosocomios.

También se avanzó en una investigación respecto de presuntas irregularidades en la esterilización de elementos quirúrgicos (incluido material descartable) utilizados en la Zona Andina y en el Alto Valle, a través de una empresa neuquina habilitada provisoriamente. Formalicé al respecto la denuncia penal correspondiente, autos caratulados "PICCININI, ANA IDA S/DENUNCIA" Expte. 42986/09 en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de la ciudad de Viedma.

La tarea inspectiva e investigativa desarrollada en materia de salud pública, se encuentran debidamente documentadas, inclusive con importante material fotográfico, informativo y testimonial que da cuenta de la situación crítica de la Salud Pública rionegrina en los últimos años, particularmente la crisis hospitalaria.

Cabe destacar que el Art. 59 de la Constitución de la Provincia de Río Negro define a la salud como " *Un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación...*"

Este derecho es asimismo reconocido por variada legislación internacional en materia de Derechos Humanos. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados reconocen el derecho de toda persona a disfrutar el "más alto nivel posible de salud física y mental" (art. 12.1.).

El derecho a la salud ha sido expresamente reconocido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Arts. XI y XII; Declaración Universal de Derechos Humanos Arts. 1º, 3º y 25º; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 4º; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 12º.

Normativa que goza de jerarquía constitucional a tenor de lo establecido por el Art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.-

Vale decir que habiendo agotado todos los esfuerzos con la Sra. Ministra de Salud en procura de medidas concretas para paliar la situación de crisis, me vi en la obligación de cursar este último requerimiento al Sr. Gobernador de la Provincia, solicitando su intervención personal, así como información sobre las acciones a desarrollar, en tiempo perentorio.

Sr. Presidente, Sres. Legisladores, el Gobernador no respondió absolutamente nada, por lo que resulta inminente la presentación de una acción judicial en procura de garantizar el derecho a la salud de todos los rionegrinos.

RESIDUOS PATÓGENOS

El día 9 de Octubre del 2008 nos constituimos en las Instalaciones del Hospital “Ramón Carrillo” de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Tras la inspección realizada, se dictó la Resolución N° 151/08 de fecha 5 de Diciembre de 2008. Arribamos a la conclusión de que las condiciones laborales (en particular de higiene y salubridad) no son buenas.

El personal está compuesto de un equipo de seis personas para 24 horas de servicio, a pesar de los pedidos efectuados no hay respuestas de las autoridades encargadas de administrar el recurso humano. La máquina con óxido de etileno para esterilizar “despareció”. Todo el material se manda a una empresa privada con domicilio en Neuquén de nombre CENEC. Esta firma esteriliza el instrumental utilizado por los centros asistenciales públicos de Bariloche y del Valle, a excepción de Viedma.

La resolución citada ut supra y diversa documental que fuera remitida a esta Defensora del Pueblo motivó la formación, de Oficio, del Expediente N° 221.09 caratulado “Defensora del Pueblo de Río Negro S/ Habilitación Sanitaria de la Empresa CENEC”

En la Nota 1010/08 suscripta por la Coordinadora Provincial de Fiscalización Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, dirigida al por entonces Director del Hospital Área Programa San Carlos de Bariloche, la funcionaria expresa que la **Empresa Neuquina CENEC no cuenta con habilitación sanitaria**, la misma se halla en trámite.

La empresa contratada por el Estado Provincial, NO CUMPLIA CON LOS REQUERIMIENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Hemos efectuado dos pedidos de informes a las autoridades de Salud Pública de la provincia.

El primero, en el mes de Marzo de 2009, a través de la nota N° 445/09 dirigida a la Señora Coordinadora Provincial de Fiscalización Sanitaria y Calidad de Servicios de Salud del Ministerio de Salud De la Provincia de Río Negro. Le solicitamos información sobre: la relación entre el Ministerio de Salud y la empresa CENEC, los controles sobre la misma, los servicios contratados, la

habilitación de la empresa, el modo de contratación y los montos percibidos por parte del estado provincial.

También solicitamos informe sobre los requerimientos técnicos que debe poseer un hospital para la esterilización de sus propios productos., lo costos que ello implicaría y si existen en el ámbito provincial empresas capacitadas para realizar la tarea encomendada a la empresa CENEC.

Como respuesta pudimos saber que el Ministerio de Salud no posee vínculo alguno con la empresa CENEC y que el control del proceso de esterilización por Oxido de Etileno lo ejerce la profesional farmacéutica Directora Técnica de cada establecimiento, el responsable provincial de políticas de medicamentos y el Área de Seguridad e Higiene laboral del Ministerio de Salud con la autorización de la Subsecretaría de Salud de Neuquén. Por otro lado, nos indicaron que los montos de contratación dependen del volumen de material que se esteriliza por mes.

Respecto de los costos que debería asumir cada hospital para esterilizar sus propios productos no se han calculado. El motivo radica en la relación costo beneficio del procedimiento especializado que requiere tecnología de alto costo y formación profesional calificada.

En el segundo pedido de informe solicitamos que se amplíen las respuestas brindadas en el primer informe. Así, tomamos conocimiento que los fondos de funcionamiento de hospitales provinciales se controlan a través de rendiciones que las áreas contables de cada uno presentan a la Subsecretaría de Administración del ministerio. Además del Hospital de San Carlos de Bariloche, nos informaron que los hospitales de Allen, Catriel, Choele Choel, El Bolsón, General Roca, Río Colorado, San Antonio Oeste y Villa Regina; contratan los servicios de la empresa CENEC.

Asimismo, indagamos acerca de cuestiones técnicas relacionadas con la reutilización de material descartable, quién determina qué elemento se descarta y cuál se reutiliza y la existencia de legislación que verse sobre el tema, entre otras cosas. En respuesta nos sugirieron solicitar esta información a las autoridades del ministerio para que sean canalizadas por las áreas correspondientes.

En fecha y atento las respuestas brindadas por la citada funcionaria, se elevó pedido de informes a la Señora Ministra de Salud De la Provincia de Río Negro, el que nunca fue respondido. En dicha nota se expresaba que se cursaron sendos pedidos de informes a la Señora Coordinadora Provincial de Fiscalización Sanitaria y Calidad de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro cuyas respuestas, amen de insuficientes se refirieron en muchas ocasiones a la necesidad de redirigir nuestro cuestionario a "las autoridades del Ministerio para que sean canalizadas a través de las áreas correspondientes" Por ello se le transcribieron las preguntas cursadas ala funcionaria inferior de ese Ministerio.

Este cuestionario nunca fue respondido por la Ministro de Salud

Surge de lo informado, que el Estado rionegrino, a través de sus hospitales, esta contratando los servicios de esterilización de material quirúrgico con una

empresa de la ciudad de Neuquén sin ejercer un adecuado y debido control sobre la misma, su situación legal, desconociendo los montos contratados y la calidad del servicio prestado.

Según consta no han efectuado visitas ni controles a las instalaciones de la empresa CENEC y han admitido durante años con su propio obrar el haber trabajado y contratado con una empresa que NO TENIA HABILITACION DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL NEUQUEN PARA SU FUNCIONAMIENTO.

El Estado rionegrino desconoce asimismo los costos que implicaría la instalación de los equipos adecuados que permitan la esterilización de los materiales que se derivan a Neuquén en cada Nosocomio o en su caso en los de mayor complejidad.

NO hay control ni cuidado ni vigilancia por parte del Ministerio de Salud de la Provincia. Esta omisión de controles pone en riesgo cierto la salud de los rionegrinos que son atendidos en lo hospitales públicos de la Provincia.

Todo ello, motivo la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía de Turno de la Primera Circunscripción Judicial de nuestra Provincia.

En el transcurso del presente año se gestionaron reclamos, aunque en menor escala que en el año anterior, relacionados con:

- Cambio de Agrupamientos.
- Recategorización
- Regularización de situación laboral
- Distribución del FOS

A los efectos de lograr una mayor firmeza en las gestiones, se efectúa un seguimiento telefónico ante la Dirección de Recursos Humanos de Salud y otras dependencias del Ministerio, como así de los Hospitales. No obstante en algunos casos, es necesario recurrir a reiteraciones por escrito.

Asimismo, también hemos registrado consultas con relación a:

- demoras en provisión de medicamentos y/o drogas oncológicas.-
- demoras en abastecimiento de medicamentos para tratamientos especiales.-
- demoras en provisión de prótesis y ortesis.-
- cirugías y tratamientos demorados por falta de fondos.-
- inconvenientes con derivaciones a centros de alta complejidad.-

Otros reclamos referidos a esta temática se situaron en torno a obstáculos administrativos en cuanto a órdenes de derivación y cuestiones de atención en puntuales nosocomios de la provincia como el Hospital Artémides Zatti de Viedma y el Hospital Rogelio Cortizo de Ing. Jacobacci.

Las solicitudes han sido derivadas al Ministerio de Salud obteniendo eventuales respuestas no siempre satisfactorias.

Uno de los casos más emblemáticos quizás se refiera a la situación de un paciente del Servicio de Salud Mental cuya familia nos solicitó se intervenga ante la inoperancia de la Dirección de ese servicio en el Ministerio de Salud.

Tras entrevistarnos personalmente con la Directora de esa Dirección se personalizó la intervención con la Institución andina de internación de personas con padecimiento mental debido a que la funcionaria se manifestó indiferente e inoperante ante los requerimientos de esta Defensoría del Pueblo.

La gestión de este Organismo en el caso fue exitosa. El joven fue internado correspondientemente en el lugar propicio para su tratamiento por gestión absoluta de la Defensoría del Pueblo.

OBRAS SOCIALES NACIONALES

Sobre el funcionamiento de las Obras Sociales Nacionales se efectuaron los siguientes reclamos:

- Inconvenientes con las coberturas medico prestacionales-
- Demoras en provisión de prótesis y ortesis
- Solicitud de provisión de medicamentos-
- Aumento de cuotas en las prepagas y cambios en plan de atención médica

PAMI

Es dable recordar que tanto la Constitución Nacional como la Provincial reconocen al individuo el derecho a la salud.

El PAMI es el organismo garante responsable de la provisión de los servicios, Nadie puede privar a una persona de medicamentos o de recibir prestaciones adecuadas para el cuidado de su salud esgrimiendo argumentos que, únicamente tienen que ver con el déficit fiscal por el que atraviesa el Estado o la burocracia administrativa. Precisamente es el Estado el que debe garantizar el derecho a la salud de sus habitantes, pues de otro modo se estaría menoscabando ese derecho y el respeto a la vida. Las autoridades responsables deberían prever una forma de redistribuir los fondos destinados a los afiliados al PAMI que en su mayoría son personas ancianas y con problemas propios relacionados con la edad.

Año a año no varían sustancialmente los reclamos, se trata de fallas reiteradas sistemáticas y estructurales. Es un organismo nacional, donde reina la burocracia administrativa, y especialmente el poco poder de decisión que tiene la Unidad de Gestión Local PAMI General Roca.

El estado no debe ni puede abandonar a su suerte a quienes pacientemente esperan que se concrete la protección que les es debida. La eficacia de las autoridades responsables en esta labor, obligadas moral y normativamente a comprometerse con los intereses de los jubilados y pensionados, debe trascender las propias gestiones. Ninguna crisis económica justifica la no entrega de medicamentos, de prestaciones medico-asistenciales, etc. pues con ello se violan los derechos y garantías constitucionales.

Es notorio en el transcurso del presente año, la rotación de “directores Interventores”. La responsabilidad empieza cuando comienza la gestión.

Queremos destacar la buena predisposición de los empleados, doctores, asistentes sociales de PAMI, tanto desde la Unidad de Gestión Local PAMI de General Roca como de las delegaciones del interior de la Provincia para poder dar una solución a las presentaciones que se efectúan ante esta Defensoría del Pueblo evitando la burocratización de las mismas y logrando resultados en su mayoría positivos.

Los reclamos por pagos de reintegros fueron en general solucionados, no sólo los presentados en este período, sino también aquellos que estaban pendientes del período anterior.

Las operaciones de cataratas, implican los reclamos más frecuentes y con mayores dificultades a la hora de asignar el turno al afiliado. Esto surge principalmente ante la carencia de prestadores médicos y las disposiciones que el organismo emite para que los pacientes se trasladen de una localidad a otro a efectuarse una operación desconociendo desde Buenos Aires las distancias entre una ciudad y otra.

La entrega de audífonos. Similar realidad a la citada anteriormente. Existe una demanda contenida desde el año 2000 y la demora en la entrega de los mismos supera muchas veces el año, eso a causa de la relación entre los prestadores, médicos y muchas veces los pacientes que al ver la demora no actualizan los estudios que son necesarios para la provisión de los audífonos.

Las presentaciones por medicamentos en general tuvieron respuesta positiva brindando a los ciudadanos los remedios y elementos que solicitaban. Estos pedidos por lo general los realizan pacientes que padecen enfermedades oncológicas.

Con el suministro de prótesis no siempre hay coincidencias entre las solicitudes y respuestas que brinda el PAMI ya que lo que el facultativo receta o prescribe para la operación no se ajusta a los nomencladores que maneja el Organismo.

Al respecto y en general, la información recogida en el tratamiento de los distintos reclamos, nos llevó a diferenciar nuestra postura en estas presentaciones, según las características del paciente al que va destinada la prótesis.

Geriátricos: La atención prestada a las personas internadas en geriátricos, afiliados a PAMI, tienen una cobertura del 100% en concepto de internación. Por cada uno de los afiliados la suma abonada ronda los \$2.000 (dos mil pesos), que se le descuenta de sus haberes. Si los haberes no alcanzan a cubrir esa suma, PAMI cubre la diferencia. En cuanto a pañales descartables se proveen sin discriminación social o económica con la sola prescripción médica. En relación a los remedios casi en su totalidad la cobertura alcanza el 100%.

En las intervenciones efectuadas, en relación a prótesis se lograron resultados positivos toda vez que el médico traumatólogo fundamentó técnicamente las razones del pedido efectuado. Se pudo constatar además, que si bien todo el

proceso de compra por la vía de excepción, se realiza en el PAMI central, éste, resultó ser muy operativo.

Como una caja de resonancia de esta sociedad rionegrina, tomamos estos ejemplos para mostrar precisamente qué sucede, cómo se desarrolla el camino que debe transitar un ciudadano mayor para poder acceder a una cobertura médica fundamental para su vida.

OBRA SOCIAL PROVINCIAL IPROSS

Los afiliados de la obra social provincial concurren a esta Defensoría solicitando la normalización en el pago de reintegros, planteando las reiteradas demoras en provisión de prótesis y ortesis, inconvenientes y atrasos en la provisión de medicamentos oncológicos, aranceles muy bajos. En algunos casos ínfimas sumas de cobertura en reintegros del menú prestacional, que comparados con lo que se abona al médico tratante son porcentajes mínimos, e inconvenientes en provisión de leche plan SOMI.

Integrantes de este organismo han asesorado tanto personal como telefónicamente a los afiliados sobre las vías administrativas disponibles para solicitar cobertura de carácter extraordinario ante la Junta de Administración del IPROSS. A lo largo del año los afiliados han utilizado las vías de excepción a fin de que su situación fuera adecuadamente contemplada.-

Los afiliados plantean asiduamente ante esta Defensoría del pueblo: “...cuando se va a normalizar el funcionamiento del IPROSS”. Es público y notorio los problemas que hoy tiene el afiliado quien en realidad no participa de la discusión y elaboración del contrato de prestación, pero es quien aporta para su sostenimiento y en definitiva quien se ve perjudicado en su atención de salud, cuando existen incumplimientos del mencionado contrato. Es decir, lo obligan a tener esa obra social, lo obligan a atenderse en los centros de salud que le imponen, le descuentan el aporte de sus haberes y cuando existe un conflicto entre la obra social y el prestador, que no le son imputables, le cortan el servicio o en definitiva atienden una menor cantidad de afiliados. Es evidente pues, que el afiliado paga la cobertura social por meses en que por falta de pago no le brindan o le restringen el servicio.-

La situación de las Delegaciones del IPROSS es desesperante, tanto en el interior de nuestra Provincia como en las Delegaciones de Bahía Blanca y Capital Federal, la falta de dinero para afrontar el pago de reintegros y gastos en prestaciones de alta complejidad, como así también se repite la demora en la entrega de leche del plan SOMI, de medicamentos oncológicos, prótesis y ortesis.-

Somos concientes de la situación de emergencia financiera en que se encuentra el Estado Provincial, como también sabemos del esfuerzo de TODOS en encontrar soluciones pero en el medio de esta ardua tarea tenemos, al aportante, al SER HUMANO el afiliado al IPROSS.-

PROFE (Programa Federal de Salud)

Este Programa Nacional, al que adhiere nuestra Provincia, beneficia a las personas que han tenido acceso a una Pensión Asistencial y a los afiliados del Programa. El beneficiario debe realizar el trámite ante las oficinas de PROFE que funcionan en todos los hospitales de la Provincia donde, munidos de su DNI y la fotocopia del último recibo de sueldo, podrán acceder a la afiliación:

A la fecha las coberturas que se efectúan a través de la Unidad de Gestión Provincial PROFE se limitan, igual que el año pasado a: internación geriátrica, acompañantes terapéuticos, atención de las personas en hemodiálisis. Se proveen pañales descartables y muy raras veces bolsas de Colostomía que deben pedirse a través de nota solicitando vía de excepción.

Cabe destacar la predisposición del Director del Programa Federal de Salud (PROFE) y sus empleados como así también la colaboración del Ministerio de Salud.

SITUACION DE AFILIADOS DE LA OBRA SOCIAL BANCARIA

En concordancia con lo informado en el Informe Anual de este organismo en el año 2008 hemos continuado las gestiones institucionales con el Ministerio de Salud de la Nación para dar una solución a los afiliados a la OSBA.

La Intervención a la OSBA y el recambio de autoridades en el Ministerio de Salud de la Nación han provocado la demora en la resolución del conflicto por lo que ratificamos nuestra intención de continuar trabando en este tema.

Debemos recordar que a raíz de nuestra intervención, se han remitido pedidos de informes al Ipross, a la Superintendencia de Servicios de Salud, y al INSSJyP. También se le dio intervención al Defensor del Pueblo de la Nación.

Han sido numerosas las gestiones realizadas y reuniones celebradas por la Defensora del Pueblo con autoridades nacionales y provinciales, como ser el Consejo de la Función Pública, la ex Ministra de Salud de la Provincia, el Superintendente de Servicios de Salud de la Nación y la Gerencia de Asuntos Interjurisdiccionales de la ANSES.

También se celebraron numerosas entrevistas con los representantes de los asociados a la Bancaria de esta Provincia, así como que se han evacuado consultas personales y telefónicas con diversos afiliados que preocupados por la situación concurrieron a esta Institución. A modo de ejemplo cito al Centro de Jubilados Bancarios residentes en Bahía Blanca.

Las trabas que encontramos han sido muchas, desde la incompetencia legal de este organismo, hasta la imposibilidad del traspaso directo de los afiliados a la OSBA al PAMI. En el afán de conseguir una solución a la temática, que ya lleva investigándose casi dos años, hemos también intervenido ante la Gerencia de Asuntos Interjurisdiccionales de la Anses, la que, a su vez, se contactó con las autoridades del Ipross.

En fecha 23 de abril del corriente año ingresó, en respuesta a nuestro pedido de informe, una nota suscripta por el Secretario de la Junta de Administración del Ipross en la que se informa que la problemática de los afiliados a la bancaria "ya fue tratada en el seno de esta Junta y que se envió Nota N° 69/09 "Pcia Ipross." al Sr. Gobernador en la cual se realiza un informe pormenorizado de la situación planteada por los jubilados bancarios, la cobertura de salud que poseen actualmente y el análisis de una posible incorporación como Afiliados Voluntarios"

Mas allá de las cuestiones netamente burocráticas no se debe descartar la responsabilidad del titular del Sindicato y de la OSBA, quien a la fecha, no ha brindado una solución a sus afiliados y quien, pese a las numerosas quejas contra la obra social, continua siendo reelecto en su cargo gracias a los votos de los empleados de la Obra Social.

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

En cuanto a la problemática de los temas ambientales, se llevan adelante investigaciones sobre:

- Transporte de residuos peligrosos (material ex Indupa)
- Inconvenientes por quema para prevención de heladas.
- Denuncia a empresas petroleras por contaminación.
- Explotación de la cuenca del Ñirihuau.
- Contaminación de una fábrica de detergentes y lavandina.
- Explotación y extracción de basalto
- Contaminación de plomo en suspensión en San Antonio Oeste.

Nos encontramos aún a la espera de la Audiencia Pública requerida a los Municipios de Pilcaniyeu, Ñorquingo y San Carlos de Bariloche, quienes receptaron nuestra recomendación de realizarla a los efectos de la evaluar las opiniones respecto de la explotación o no de la cuenca hidrocarburífera de la zona.

Las cuestiones ambientales tienen la particularidad por tratarse de temas complejos, que se resuelven a largo plazo, por lo menos en su mayoría; así se mantienen las actuaciones abiertas con un seguimiento periódico de su avance y debe hacerse un trabajo a largo plazo, algunos de ellos de larga data.

En relación a las antenas de celulares instaladas en el radio urbano, se continúa de cerca el avance de la ciencia y legislación sobre el particular, asesorando y recabando información que permita dar certeza respecto de su influencia en la salud y la forma de prevenir eventuales afecciones.

Resaltamos que el Consejo de Ecología y Medio Ambiente responde a los pedidos de informes solicitados por esta Defensoría, aunque en la gran mayoría sin encontrar satisfacción en los reclamantes.

Insistimos en la necesidad de que el organismo tome una posición más comprometida con los planteos formulados por los ciudadanos de la Provincia y efectuar investigaciones y trabajos que permitan resolver cuestiones que se encuentran bajo su órbita de competencia.-,

AGUA POTABLE Y CLOACAS

Tal como el año pasado y en comparación a otros años se mantiene la tendencia a la disminución de los reclamos relacionados con el servicio de agua potable y cloacas.

Con relación a los escasos reclamos que se efectúan por presuntas facturaciones erróneas, o avisos de cortes del servicio por falta de pago, debemos destacar la muy buena predisposición del personal de las Oficinas de los Servicios de la empresa ARSA, permitiendo a los usuarios acceder a convenios con cuotas razonables, buscando una solución a partir de la cuestión planteada.

No debemos dejar de mencionar los reclamos que sigue generando el servicio de desagües de líquidos cloacales en el Balneario Las Grutas, el cual se repite año tras año, sin encontrar una solución de fondo.-

Igual situación ocurre en San Carlos de Bariloche, donde la insuficiencia de la planta actual y el deficiente funcionamiento de la Colectora Oeste, provocan constantes reclamos de vecinos por el vertido de líquidos crudos a lago Nahuel Huapi.

Otros reclamos se relacionan con:

- Inconvenientes para la conexión al servicio de agua potable en domicilios por deficiencia en la acreditación de titularidad del inmueble.
- Problemas por derrame de aguas servidas.
- Cobro de cargo fijo en concepto de agua y cloacas, en lotes o viviendas, que no están conectados al servicio.
- Cobros de deudas por parte de Cooperativas de Agua.

No obstante, debemos señalar que en algunos sectores centrales de la Empresa, no siempre se ha tenido una respuesta inmediata, habiéndose llegado incluso a reiterar en varias oportunidades por escrito, hasta tener que recurrir al Ente Regulador (DPA), y al solo efecto de poder conseguir una respuesta para hacer llegar las novedades al usuario.

El Departamento Provincial de Aguas conserva su buena predisposición ante los pedidos de consulta, así como encontrar una salida a los planteos efectuados.

NORMALIZACIÓN DEL CONSORCIO DE RIEGO

A pedido de productores autoconvocados, avanzamos en el análisis de costos y gastos del Consorcio de Riego del Valle Inferior, durante los períodos de la intervención por el IDEVI desde el año 2006 a la actualidad.

De lo expuesto se derivaron actuaciones paralelas y vinculadas entre sí, donde se evalúa el empadronamiento de hectáreas bajo riego en la zona prevista para la expansión del IDEVI, la eventual desviación del agua hacia campos aledaños ajenos a dicha expansión.

Por último nos encontramos avocados al análisis del funcionamiento e interrelación entre el, Consorcio de Riego y Drenaje del VIRN, el IDEVI, la Cámara de Productores del Valle Inferior y el Frigorífico de Frutas el Juncal.

GAS

En virtud de lo que es de público conocimiento hemos presentado una acción de amparo colectivo (Exp. 599/09) contra el ESTADO NACIONAL (Poder Ejecutivo Nacional), y contra el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A con el objeto de declarar la Inconstitucionalidad por ilegitimidad manifiesta del Decreto del PEN N° 2067, del 27 de noviembre de 2008, Resolución N° 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, del 12/12/08, publicada en B.O. con fecha 23/12/08; Resolución N° 563 dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), del 15/12/08, publicada en B.O. el 23/12/08 y Resolución N° 570/08 dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) con fecha 16/12/08.

Esta acción se promovió en tutela de los derechos colectivos de los usuarios del servicio público de gas natural por redes de la Provincia de Río Negro, perjudicados por el incremento de los montos que deberán pagar en sus facturas a raíz de la aplicación de los cargos establecidos en las normas atacadas, respecto de las cuales solicitamos se declare a los mismos inconstitucionales por ilegitimidad manifiesta, y debimos interponer una demanda por cada jurisdicción provincial (Bariloche, Alto valle y Atlántica) cubriendo de esta forma toda la geografía.

Habiendo solicitado cautelarmente la suspensión de su aplicación, en atención a la jerarquía de los derechos conculcados, el inminente e irreparable daño que se provocaría con la automática aplicación logramos evitar su vigencia, siendo la única provincia que impidió su aplicación.

Actualmente siguen en trámite las actuaciones principales a la espera de una sentencia definitiva.

ELECTRICIDAD

El servicio público de distribución de electricidad concentra sus reclamos en deficiencias provocadas por baja tensión o cortes, reclamos colectivos por problemas en el servicio que prestan las Cooperativas, como es el caso de Río

Colorado ó San Carlos de Bariloche y ruidos molestos que provienen de Centrales Hidroeléctricas.

Algunos de los reclamos son tramitados por escrito o telefónicamente, teniendo en cuenta el tenor del mismo y a efectos de dar una mayor celeridad al problema, en otros casos al reclamante se lo asesora personalmente.

Cabe destacar, de todas maneras, la merma de reclamos.

No podemos dejar mencionar aquí, que se mantiene el estado de incertidumbre de años anteriores respecto del abastecimiento a ciudades principales de la provincia como son San Carlos de Bariloche, ante la ausencia de una segunda línea de alta tensión y Villa Regina, por ser una ciudad punta de línea y una de las de mayor consumo de la zona a causa de los frigoríficos y galpones de empaque.

Por último y según hemos reiterado en cada una de las audiencias públicas que nos presentamos, insistimos en la insuficiencia del sistema de control "ex post" que utiliza el EPRE y basado en el análisis de contingencias ocurridas y NO en la realidad de la empresa y sus inversiones. Dicha circunstancia seguramente nos encontrará, en una situación límite donde será tarde para hacer las inversiones necesarias para recuperar un servicio eficiente.

REVISIÓN TARIFARIA

Nos encontramos a la espera de la audiencia de prueba, donde las partes actoras (PROCONSUMER y Defensoría del Pueblo) ofrecerán las razones que entiende acreditarán el sobre costo de energía cobrado a los usuarios de la provincia entre los años 1996 a 2001 por exceder el TOPE MEM en el traslado de costo de abastecimiento de energía, violentando el marco regulatorio de la actividad (art. 43 de la ley 2902) Act. "PROCONSUMER c/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO y EdERSA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. N° 106-CADM-01)

Telefonía fija

Los reclamos formulados por usuarios del servicio básico de telefonía residencial en su gran mayoría cuestionaban las facturaciones emitidas por la empresa Telefónica de Argentina. Menos abundantes fueron los reclamos por: falta de cumplimiento contractual, solicitudes de baja, remoción del cableado y traslado del servicio.

En cada caso se derivaron los antecedentes del reclamo a la Delegación Río Negro de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en tanto ente regulador del servicio telefónico. Las numerosas demandas hacen que la capacidad de la CNC de dar satisfacción a los reclamos, se vea colmada en sus funciones. Tal situación motivó la queja de usuarios cuestionando la demora de la Comisión Nacional de Comunicaciones en emitir su dictamen.

Telefonía celular

Menos abundantes fueron las denuncias vinculadas al servicio de telefonía celular, cuyos antecedentes fueron derivados a la Comisión Nacional de

Comunicaciones. Los reclamos estuvieron vinculados a: pretensión de cobro de deudas inexistentes, facturaciones indebidas, quita de crédito acumulado y solicitud de baja del servicio.

Servicio de Internet

Los usuarios del servicio de Internet Speedy cuestionaban la interrupción del servicio por varios días y la baja velocidad en la transmisión de datos, así como las facturaciones emitidas en los periodos en que no se brindó tal servicio.

Defensa del Consumidor

Los reclamos de los consumidores y usuarios de servicios fueron derivados a la Dirección General de Comercio Interior, para que en el marco de sus competencias pueda convocar a audiencias y aplicar sanciones, así como otras tareas de aplicación de las leyes nacionales y provinciales en la materia.

Entre las temáticas presentadas, se destacan cuestionamientos vinculados a: deficiencias en el servicio de televisión por cable, compra de equipos celulares con desperfectos, demora en la atención al público en el Banco Patagonia y solicitud de cierre de cuenta bancaria, entre otros.

Servicios Bancarios

Las denuncias más recurrentes por servicios bancarios se vincularon a: Solicitudes de bajas de servicios no contratados, cuestionamientos por cobro de mantenimiento de cuenta comitente, otorgamiento de créditos hipotecarios, intereses abusivos en tarjetas de crédito, falta de aplicación de la Ley 3.669 – de espera del público- y revalúo de créditos hipotecarios.

En todos los casos se derivaron las presentaciones a las entidades bancarias involucradas en la denuncia, requiriéndose en carácter de colaboración brinden una respuesta a las inquietudes formuladas por los promotores de las quejas. En otras situaciones se requirió la intervención de la Dirección General de Comercio Interior en atención a la ley 24.240 que regula los derechos de consumidores y usuarios.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En relación a esta temática se han recepcionado reclamos referidos, básicamente, a la accesibilidad al transporte gratuito establecido para las personas con capacidades diferentes y también reclamos con motivo del otorgamiento del certificado de discapacidad. Éstos últimos han sido solucionados en el ámbito de la interacción con el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad. No así la temática del acceso gratuito a medios de transporte, lo cual continúa siendo una dificultad que no encuentra univocidad de criterios para establecer un normal funcionamiento.

En otro ámbito de esta cuestión, el reclamo quizás más significativo fue efectuado por representantes del Consejo Local del Discapacitado de San Antonio Oeste. Solicitaron se intervenga ante la situación de precariedad de

equipo especializado por la cual atraviesa el Hospital Aníbal Serra. Ante ello se solicitó informe y debida intervención tanto al Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad así como al Ministerio de Salud y al Hospital de San Antonio Oeste.

En cuanto a los resultados obtenidos, es de destacar que el Presidente del Consejo Provincial se constituyó en la ciudad y, según nos informó la reclamante, se lograron avances en lo referido al funcionamiento y apoyo del Consejo local.

Por otra parte, ante la necesidad planteada al Ministerio de Salud, y tras haber reiterado la solicitud, desde éste se nos informó, textualmente, que “se espera que cada persona, de acuerdo a la necesidad de servicios que requiere por su discapacidad, pueda acceder al nivel de complejidad correspondiente en su localidad o por derivación”.

No obstante ello, en otro párrafo del informe se manifestó que “no es posible establecer fehacientemente, salvo por informes periódicos del hospital, la estrategia terapéutica y la evolución de la persona, con el riesgo de burocratizarlo”.

Finalmente expresa la nota que “los Consejos Locales son la instancia más adecuada para la coordinación interinstitucional actuando los niveles provinciales de ambos Ministerios como catalizadores de las gestiones y trámites para la resolución de problemas”.

Con motivo de la accesibilidad al trabajo dentro de la Administración Pública, continúa siendo de real existencia que las personas con discapacidad y sus familiares deambulan por las oficinas ofertándose como postulantes sin obtener resultados favorables en la mayoría de los casos.

Como resultado de ello se intervino solicitando una serie de informes al Consejo de la Función Pública y a la Secretaría de Estado de Trabajo, desde donde las respuestas no han sido satisfactorias y no han llegado al día de la fecha, respectivamente.

Como punto llamativo también se mencionará que se trabajó un reclamo referido al otorgamiento de un subsidio anual que el Ministerio de Familia está comprometido a otorgar a Organizaciones independientes que se dedican a la compleja tarea de trabajar a diario e incansablemente por la inclusión social de las personas con discapacidad.

Ante las demoras que no hicieron otra cosa que complicar la tarea noble desarrollada por ese tipo de Instituciones, se solicitó en reiteradas oportunidades tanto al Ministerio de Familia como al Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad se arbitren los medios para acelerar el depósito del beneficio acordado. Ante ello, la Institución en cuestión se encontró con la fundamentación de que la crisis económica mundial no permitía la cancelación del compromiso.

Otros reclamos tienen relación con problemas en la certificación de discapacidad y pedidos de reconsideración de la valoración de discapacidad en las denominadas Juntas Evaluadoras. Asimismo se han presentado jóvenes rionegrinos pertenecientes al colectivo social de la discapacidad que solicitan ser empleados en la Administración Pública provincial, tal como lo prevé la Ley de Protección Integral para las Personas con Discapacidad.

Se logró que la Municipalidad de Carmen de Patagones dictara una ordenanza que adhiera al cupo que estipula la, que obliga al Estado a destinarles el 4% de los puestos en el empleo publico a personas con discapacidad.

Sobre esta misma temática, y tras haber propuesto líneas de acción a diversos Organismos vinculados a la inclusión social de personas con discapacidad, se solicitó a la Secretaría de la Función Publica informe sobre las competencias de esa Secretaría en relación al ingreso al empleo público según lo dispuesto en la Ley 2055 así como el registro de trabajadores estatales con discapacidad, detallado por Organismo y Localidad.

Se nos informó que *“esta Secretaría Ejecutiva no tiene competencia alguna sobre el tema objeto de consulta, toda vez que, resulta autoridad de aplicación el Consejo del Discapacitado y la Secretaría de Trabajo.”*

BECAS DE ESTUDIO- BOLETO ESTUDIANIL Y TRANSPORTE

PROGRAMA PROVINCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS/TERCIARIAS.

La Defensoría del Pueblo ha trabajado sobre el Programa de Becas estudiantiles. Desde el Consejo Provincial de Becas se ha accedido a nuestra solicitud de poder participar en las reuniones del mismo.

La problemática mayor referida al correcto funcionamiento del programa radicó en que al día de la fecha no se ha efectuado el pago de la totalidad de las becas.

A raíz de ello se ha solicitado al Sr. Presidente del Consejo Provincial de Becas, Dn. Alfredo Pega, se arbitren los medios necesarios para que las becas de este período se agilicen en lo que refiere a su pago. Luego de una desafortunada respuesta, se solicitó al Ministro de Educación y al de Hacienda de la Provincia se arbitren los medios necesarios para efectuar el pago correspondiente, el cual, pese a las públicas gestiones, no se ha efectuado al día de la fecha.

Por otra parte, aquellos reclamos que demandaban una intervención de índole administrativa en cuanto a procedimientos de inscripción han sido resueltos favorablemente.

BOLETO ESTUDIANIL

Reiteradamente se ha solicitado a esta Defensoría del Pueblo que intervenga ante la situación de no implementación del boleto estudiantil.

A través de una intensa gestión del Organismo que dirijo se ha logrado finalmente la resolución de la problemática.

Los reclamos se enmarcan en la Ley de Boleto Estudiantil N° 3831 y el principal obstáculo que impidió la implementación del beneficio radicaba en la resistencia puesta de manifiesto por la misma Dirección General de Rentas (DGR) ha emitir el dictado de la reglamentación de los beneficios impositivos destinados a las empresas de transporte.

Como corolario de la cuestión, y luego de haber remitido como última medida las derivaciones correspondientes al Sr. Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Cr. Pablo Federico Verani, la Dirección General de Rentas emitió la Resolución N° 1040/09 (BO N° 4765 del 05-10-09). La misma viene a superar los obstáculos invocados por las empresas de transporte, que impidieron por tanto tiempo la implementación del beneficio.

A partir de la nueva reglamentación, ha quedado establecido el mecanismo por el cual las empresas podrán acceder a las deducciones impositivas por aplicación del sistema de bonificación y/o descuento por la venta del boleto estudiantil.

A tal efecto desde la Defensoría del Pueblo se remitió nota informativa a las principales empresas de transporte de Río Negro así como también se solicitó al Sr. Director de Transporte y Aeronáutica, Prof. Oscar Villani, se sirva informar los mecanismos y estrategias de control que se pondrán en marcha desde la Dirección que encabeza. Tal solicitud no ha sido respondida al día de la fecha, aún tras haber reiterado las misivas correspondientes .

DISCRIMINACIÓN

Se han realizado presentaciones ante esta Defensoría del Pueblo sobre casos que plantean situaciones de discriminación en diversos ámbitos del mundo social así como en las dependencias de la administración pública provincial.

Es necesario hacer mención a que se reiteran de forma persistente las presentaciones que denuncian maltrato laboral.

Al igual que en nuestro anterior informe anual, y en pos de una concientización respecto de lo traumático que resultan los conflictos laborales, mobbing generalmente, invoco a que los Organismos encargados de trabajar en esta problemática, así como los propios Organismos en donde suceden los hechos, arbitren las medidas necesarias con el fin de elaborar estrategias de comunicación y clima laboral que prevengan este tipo de situaciones que, en última instancia configuran una problemática personal para el empleado así como también, y en última instancia, para el normal funcionamiento de la administración pública provincial.

Otras situaciones de discriminación traídas a conocimiento a esta Defensoría por los ciudadanos han sido derivadas al Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo, INADI, delegación San Carlos de Bariloche.

En el marco de la Res. 1528/06 se derivó oportunamente la situación de una ciudadana que reclamaba por la decisión de Consolidar Salud de no admitir la solicitud de ingreso a la cobertura de salud solicitada, manifestando que esta situación implica discriminación, pues el resto de sus compañeros de trabajo pudieron incorporarse a la prepaga referida.

Es de mencionar que esta Defensoría ha firmado con la Delegación del INADI de San Carlos de Bariloche un convenio de asistencia mutua, y que al cierre de este informe se utilizaron las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para que se realizaran las audiencias por casos que tramitan ante aquel organismo nacional y que afectan a ciudadanos de nuestra provincia.

EDUCACIÓN

SISTEMA EDUCATIVO

En el curso del período abarcado por el presente informe se han tramitado numerosos reclamos vinculados a la demanda de la población en materia educativa. Similarmente al período anterior, las problemáticas edilicias no fueron las más recurrentes.

Aquellas relacionadas a problemáticas edilicias cuestionaban específicamente a las irregularidades sanitarias en la Escuela N° 335 de Allen, a la falta de seguridad e higiene en el CEM N° 31 de General Roca, a las deficiencias edilicias en el Jardín Maternal Comunitario de El Bolsón y a la construcción de un SUM para la Escuela Especial N° 7 de Viedma. En cada uno de los casos se corrió traslado de la denuncia a la Dirección General de Infraestructura Escolar. A la fecha se dio satisfacción a las demandas de General Roca y Viedma.

En cuanto a la convivencia en el ámbito escolar hemos recepcionado reclamos por conflictos entre directivos de establecimientos educativos, con docentes, personal de servicios generales y miembros de la comisión cooperadora. En cada caso se requirió información a las autoridades de la institución y se dio intervención al Consejo Provincial de Educación, para la resolución de dichos conflictos.

Una cuestión recurrente fueron los reclamos por falta de pago de compensación por movilidad docente y liquidaciones erróneas en los haberes. Por su parte, los docentes de Río Colorado cuestionaron la demora en la entrega de sus recibos de haberes, situación ésta, que impide el reclamo en tiempo forma en los casos de liquidaciones erróneas. Cabe destacar la reticencia del Director de Liquidaciones del CPE para dar respuestas a los traslados de reclamos cursados desde esta Defensoría del Pueblo.

El cambio de modalidad de Escuela Hogar N° 126 de Aguada Cecilio a Escuela Primaria Común, motivó el reclamo de un grupo de padres que solicitaban la revocación de la Resolución N° 2923/08 que dispuso dicha transformación. Del informe requerido a la Dirección de Escuelas Hogares y Residencias Escolares se constató que la decisión adoptada por el Consejo Provincial de Educación radicaba en que la mayoría de los alumnos residentes provenían de la localidad de San Antonio Oeste y fueron inscriptos en esa institución por razones económicas y socio-familiares, sosteniendo que tales circunstancias no constituyen motivos suficientes para institucionalizar a los menores, conforme la ley de protección de los derechos del niño y adolescente. A los fines de garantizar el derecho a la educación de los niños residentes en el paraje, la escuela continúa funcionando como Escuela Primaria Común.

En menor medida, otros temas abordados fueron: situación escalafonaria, ampliación de la oferta educativa y/o de la matrícula, equipamiento para escuelas técnicas, pago a proveedores, solicitudes de ingreso como personal de servicios generales, traslados, readecuación de tareas, incremento en el valor de las cuotas en establecimientos privados, demora en la resoluciones emitidas por la Junta de Disciplina, Irregularidades en la Escuela de Hotelería y Gastronomía de San Carlos de Bariloche, mal funcionamiento y precariedad del Jardín Maternal Pie Pequeño, posible cierre del CET N° 40, entre otros. Muchos de ellos encuentran solución en tiempos prudenciales, otros están aún bajo investigación y todos aquellos que se resuelven mediante el pago de sumas de dinero, son los que mayores demoras presentan (proveedores, retroactivos, etc).

INTERVENCIÓN EN CONFLICTO DOCENTE

Con fecha 25 de Marzo de 2009 cursamos nota al Sr. Ministro de Gobierno, requiriendo la urgente convocatoria a reunión paritaria, que posibilitara destrabar el conflicto docente que ya registraba 31 días con cortes de ruta y había afectado el inicio mismo del ciclo lectivo.

La situación era insostenible por el grado alarmante de descontento popular y por encontrarse seriamente comprometida la paz social, más allá de tornar ilusorio el cumplimiento de los 180 días de clase previstos por la legislación vigente.

Ello había sido advertido al Sr. Gobernador mediante Resolución N° 37/09 de fecha 19 de marzo de 2009, a través de la cual le Recomendé encauzar el conflicto dentro de los carriles constitucionales y legales, a fin de evitar las consecuencias lamentables que la profundización del mismo pudiera ocasionar.

Lejos de considerar la recomendación formulada, el Gobierno Provincial persistía en su actitud de no encausar el conflicto docente – que es un conflicto laboral - dentro de los carriles legales, esto es formalizando cualquier propuesta dentro del ámbito de negociación correspondiente, cual es la paritaria docente.

Más aun, omitió deliberadamente utilizar la herramienta extraordinaria de la conciliación obligatoria con miras al cese inmediato de las medidas de acción directa, contribuyendo de esta forma a que el conflicto se agravara con el transcurso de los días, por lo que quedaba expuesta la sociedad rionegrina a enfrentamientos que eran perfectamente evitables.

A partir de lo cual apele en esa oportunidad al Sr. Ministro, en su carácter de principal responsable de la cartera laboral, para que disponga de inmediato las medidas idóneas requeridas al efecto, haciéndolo personalmente responsable junto con el Primer Mandatario, de las consecuencias que su accionar omisivo pudiera ocasionar.

Finalmente el conflicto se superó merced a una medida cautelar dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia con fecha 30-03-09, que ordenó al Poder Ejecutivo Provincial cumplir con el deber de “educar” a los niños, para lo cual resultaba imprescindible reestablecer el ámbito legítimo de negociación colectiva y el levantamiento de las medidas gremiales.

Esperemos que el comienzo del ciclo lectivo 2010 no nos sorprenda con un nuevo conflicto y que puedan nuestros niños y adolescentes cumplir con los objetivos mínimos que si duda este año estuvieron lejos de cumplirse.

Denuncia de la Asamblea por la Educación Pública (Bariloche).

En el mes de Marzo del corriente año la Asamblea por la Educación Pública de San Carlos de Bariloche denunció el estado deteriorado de una gran cantidad de establecimientos educativos de esa ciudad. Con motivo de ello la Defensora del Pueblo se constituyó en esa ciudad a los fines de realizar una inspección por cada uno de los establecimientos.

De esa forma, el día 12 de Marzo se inspeccionaron los C.E.M. N° 138, 36, 77, 45, las escuelas N° 185 y 320, la Escuela Especial N° 6, el Jardín N° 44 y el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Docente.

La totalidad de los establecimientos se encontraban en una deplorable situación de mantenimiento edilicio.

Inmediatamente esta Defensora del Pueblo dispuso solicitar al Ministerio de Educación un informe detallado acerca de las empresas encargadas de llevar a cabo el mantenimiento, así como las eventuales estrategias tendientes a atender la problemática que mantiene, al día de la fecha, movilizadas a la comunidad educativa barilocheense.

Se nos contestó en el mes de Mayo que, en relación a la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Especial N° 6, en el presupuesto vigente no se encuentra contemplada tal empresa, siendo una prioridad que ese Ministerio ha fijado para el próximo año.

En esa misma respuesta se expresa que con respecto al estado edilicio de los restantes edificios, se ejerce sobre ellos un constante mantenimiento ya que existe un contrato con una empresa privada.

No obstante ello se indica en el informe que en ese mes (Mayo) se dispuso la realización de una inspección de los inmuebles con el propósito de ejecutar las reparaciones más urgentes.

Por otra parte se nos informó que en relación al C.E.M. N° 138 de San Carlos de Bariloche se le adjudicó a la firma MOCCIOLA Construcciones la ejecución del edificio propio con fecha de iniciación de los trabajos el 01 de Septiembre de 2009 y un plazo de ejecución de 18 meses.

Finalmente, sobre el segundo semestre del año se suscitó una problemática referida al refrigerio escolar en esa misma ciudad.

A causa de la supuesta mala calidad de los alimentos se solicitó expresamente a las Directoras de establecimientos educativos de la zona andina remitiesen sus consideraciones en relación al tema a esta Defensora del Pueblo a los fines de acopiar la documentación pertinente la que luego fue remitida a la Asamblea por la Educación Pública a los efectos y fines correspondientes a la causa judicial.

El día 21 de Agosto del corriente año se solicitó por nota al Sr. Intendente de la ciudad de San Carlos de Bariloche un informe detallado acerca de los procesos referidos a la implementación del refrigerio escolar, siendo éstos los aspectos económicos, de control de calidad, de periodicidad, de entrega, aspectos referidos a las tercerizaciones efectuadas por las empresas adjudicatarias, relación con los establecimientos beneficiarios del refrigerio, etc.

Tras haber reiterado la solicitud, al día de la fecha no se obtuvo respuesta alguna.

La leche, entregada por convenio entre El Ministerio de Educación y el Municipio de San Carlos de Bariloche resultó, como fue y es de público y notorio conocimiento, estar adulterada. No se ha obtenido respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Social barilochense, Secretaría a la cual se reiteró la solicitud.

Mario Bunge¹ explica que hay cuatro concepciones principales del desarrollo de una sociedad humana: la biológica, la económica, la política y la cultural.

En relación a ellas Bunge sostiene que hay, generalmente, un obstáculo que se presenta en el concepto de desarrollo. A saber, que hay diversas concepciones encontradas, casi todas ellas equivocadas, no tanto por lo que sostienen sino por lo que callan.

Tal obstáculo consiste en una síntesis de los puntos de vista parciales del biologismo, el economismo, el politicismo y el culturalismo. Se sigue que el desarrollo de una sociedad es a la vez biológico, económico, político y cultural.

¹ BUNGE, Mario; *Ciencia, técnica y desarrollo*; Sudamericana; Bs. As.; 1997.

Me centraré en desarrollar brevemente, y a título de conclusiones, estos desarrollos conceptuales.

Escribe Bunge que según la concepción biológica del desarrollo, éste consiste en un aumento del bienestar y una mejora de la salud como resultados de mejoras de la nutrición, el alojamiento, la vestimenta, el ejercicio, los hábitos de convivencia. Por loable que parezca es utópica por no ocuparse de los medios requeridos para superar el subdesarrollo biológico. Tómese por ejemplo la desnutrición crónica que afecta a tantas sociedades del tercer mundo. Si se tienen en cuenta factores de esta índole se comprende que el subdesarrollo biológico no se corrige con medidas puramente biológicas, tales como aumentar el número de médicos, hospitales y dispensarios, sino adoptando todo un sistema multidimensional de medidas: biológicas, económicas, políticas y culturales.

En relación a la concepción economicista del desarrollo, el autor la identifica con crecimiento económico, el que a su vez es igualado con frecuencia a la industrialización. También ella es falaz: del hecho de que el desarrollo económico es un componente necesario del desarrollo se infiere que es suficiente. Para peor es una concepción que puede aplastar al resto y con ello poner en peligro el propio desarrollo económico. En efecto el desarrollismo económico ha impuesto a menudo ingentes sacrificios del nivel de vida, de la cultura y de la vida política, lo que es una aberración, ya que la economía debiera ser medio y no fin. No se produce por producir sino para satisfacer necesidades y, si éstas quedan insatisfechas, de nada sirve el crecimiento económico.

De acuerdo con la concepción política del desarrollo el progreso político, con ser necesario, no basta. De nada sirven los derechos políticos si faltan los medios económicos y culturales para ejercerlos. El progreso político no consiste meramente en afianzar un sistema multipartidario y levantar las censuras, sino en incrementar la participación pública tanto en la discusión de políticas y la toma de decisiones como en su implementación. La única manera de asegurar un derecho es cumpliendo con el deber correspondiente.

La concepción cultural del desarrollo lo iguala con el enriquecimiento de la cultura y la difusión de la educación. También ella es deficiente. El escolar en ayunas no aprende bien; el adulto desocupado o sobrecargado de trabajo no asiste a conciertos ni escribe poemas, y el maestro controlado por la censura no se atreve a buscar la verdad ni menos a enseñarla. El desarrollo cultural no es pleno si no va acompañado del desarrollo biológico, económico y político.

El mensaje que se esboza en los pensamientos de Bunge, y a los que deseo aludir, se inspiran en la afirmación de que el desarrollo auténtico y sostenido es, pues, integral: a la vez biológico, económico, político y cultural. Esta es, en resumen, la concepción integral del desarrollo.

La tesis de que no puede impulsarse el desarrollo simultáneo de los cuatro aspectos, por lo que hay que sacrificar alguno de ellos, es un error costoso. No se puede alcanzar un nivel desarrollado en uno solo de los cuatro aspectos,

dejando los otros para un futuro incierto, porque cada uno de ellos es condición de los demás.

Por consiguiente, el medir el grado de desarrollo de una sociedad mediante indicadores de un solo tipo (por ejemplo económicos) produce una visión deformada de la realidad social e inspira planes de desarrollos ineficaces y por lo tanto costosos.

DERECHO DE FAMILIA

POLÍTICAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

Fueron reiteradas las solicitudes de ciudadanos rionegrinos que manifiestan atravesar situaciones de extrema necesidad en lo que a la satisfacción de sus necesidades básicas se refiere.

El incremento de la pobreza es una situación que observamos con preocupación.

Sobre ello se trabaja generalmente bajo la modalidad de gestión personalizada a los fines de tratar de impedir la burocratización de la gestión. Sin embargo, frecuentemente, por falta de respuesta, se procede a remitir notas a los Organismos competentes, siendo éstos los Municipios y el Ministerio de Familia.

Los resultados son, en líneas generales, favorables, pues se logra la inclusión de los grupos familiares en Planes de Asistencia Social.

También se presentaron demandas vinculadas a necesidad de asistencia económica (subsidios) derivados por falta de empleo, bajas de Programas de Empleo provinciales y nacionales. Se recibieron presentaciones en las que solicitan el recupero de beneficios así como también solicitan búsqueda de trabajo.

Fue significativamente frecuente, en sus distintos estratos, la recepción de reclamos fundados en que no se llegan a cubrir las necesidades alimentarias básicas con la asistencia brindada así como en la discontinuidad en la entrega de la misma.

Se trabajó, mayoritariamente, con las Áreas Sociales de los Municipios y con la Subsecretaría de Políticas Nutricionales del Ministerio de Familia.

ASISTENCIA HABITACIONAL

Quienes contaban con un terreno solicitaron ser incorporados al programa Habitar en Familia y la ayuda brindada resultó parcial sin poder terminar unidades habitacionales mínimas propuestas.

En cuanto a la tenencia de la tierra se presentan casos de quienes tomaron un lote en un determinado momento por un estado de necesidad y por consiguiente no tienen acceso a programas habitacionales que requieren la tenencia legal de la tierra.

Mencionan que han cumplimentado los requisitos de solicitud de un lote pero el listado es grande y no hay tierras municipales disponibles.

Dada la descentralización operativa de los Programas Sociales provinciales en los municipios y ONG., organismos que se encuentran fuera de la competencia de la Defensoría del Pueblo, se orientó y brindó la información detallada a los promotores de las presentaciones para dar correcto cauce administrativo a sus reclamos, así como también se puso en conocimiento de cada uno de ellos a las autoridades responsables de dar una respuesta a la petición del ciudadano.

SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE PROMOCIÓN FAMILIAR (ROCA).

Como es de público conocimiento, los trabajadores de Promoción Familiar de Gral. Roca han denunciado en el transcurso del año 2009 una situación de precariedad laboral extrema así como abusos de autoridad reiterados por parte del Delegado local Néstor Epulef y la Coordinadora Técnica, Patricia Sánchez.

En razón de ello en el mes de Mayo iniciaron una ocupación pacífica de la Delegación.

Luego de 64 días de conflicto, finalmente se suscribió entre las partes un acta acuerdo en el que se establecieron las pautas para dar definitiva solución a la situación.

Luego de un tiempo prudencial los trabajadores denunciaron a este organismo que las autoridades del Ministerio de Familia no estaban cumpliendo con el acta mencionada y los puntos que en él se encuentran establecidos.

En virtud de ello, el día 16 de Octubre del corriente año se remitió al Sr. Ministro de Familia, Dn. Alfredo Pega, la Resolución N° 55.09 "DPRN" en la cual se le recomendó, en pos del respeto a la calidad institucionalidad, intervenga personalmente ante el conflicto nuevamente planteado. (Ver Anexo Resoluciones)

A ello el Sr. Ministro respondió que los juicios vertidos en los considerandos de la Resolución no se ajustan a la realidad, expresando que los puntos del Acta Acuerdo han sido rigurosamente respetados por el Ministerio a su cargo.

Finalmente manifestó en la respuesta el Sr. Ministro que considera innecesario volver a intervenir en forma personal en el conflicto ya que oportunamente había concurrido a uno de los encuentros y había dado las instrucciones pertinentes a sus funcionarios para dar cumplimiento con los términos de acta.

Ello no concuerda con la versión de los hechos formulada últimamente por los trabajadores, por lo que seguimos analizando la cuestión..

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En todo lo referente a la situación de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social o familiar, esta Defensoría recepciona denuncias de vecinos, parientes, o ciudadanos bajo identidad reservada. Asimismo se formalizan actuaciones de oficio a partir de publicaciones periodísticas.

Según las situaciones traídas a conocimiento se solicita informes a Delegaciones de Promoción Familiar, Oficinas de Asuntos Tutelares, Comisarías, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Asimismo se trabaja en forma coordinada con Defensorías de Menores e Incapaces, o Fiscalías en turno.

Es de resaltar que se evidencia falta de coordinación entre los diferentes organismos involucrados para la asistencia de niños, niñas y adolescentes. La falta de interacción y comunicación entre los diferentes organismos que intervienen atenta contra la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, pudiendo en algunas casos provocar revictimizaciones debido a las múltiples intervenciones de operadores de distintas instituciones.

Asimismo se evidencia la misma falta de coordinación en la asistencia de otras problemáticas como jóvenes en situación de adicciones, o con padecimientos de su salud mental.

Otro factor que atenta contra la buena calidad del servicio es la sobreexigencia de los técnicos y operadores, quienes se ven desbordados ante cantidad de situaciones familiares que deben asistir. Es de mencionar también la falta de recursos necesarios para la realización de su trabajo, entre estos se cuenta que no disponen regularmente de móviles para el traslado a zonas alejadas.

Centros de asistencia integral a niños, niñas y adolescentes (CAINA)

A partir de incidentes provocados por los jóvenes alojados en el Hogar CAINA varones de Viedma, se solicitó informes a la Subsecretaría de Promoción Familiar dependiente del Ministerio de Familia. Los jóvenes prendieron fuego colchones en el interior de ese Centro, y agredieron a operadores. Ante ello se requirió la presencia de personal policial y de los bomberos. Por su parte vecinos del Hogar expresaron en esta Defensoría las dificultades que enfrentaban en las relaciones de vecindad con los jóvenes, quienes les arrojaban objetos desde el Hogar hacia los patios de sus casas o los agredían.

La respuesta de la Subsecretaría da cuenta de la reubicación de los jóvenes. Y que se encontraban en proceso de trabajo con los respectivos grupos familiares “apuntando fundamentalmente al fortalecimiento de los vínculos y responsabilidad de los adultos involucrados, indagando acerca de las potencialidades de cada sujeto con el objetivo de capitalizarlas y fortalecerlas,

intentando generar espacio de escucha que les permita a los mismos poner en palabras las dificultades que atraviesan en función de poder trabajar con ellas.

Con aquellos adolescentes de mayor edad se trabaja además su independencia y proyecto de vida autónomo. En cuanto a las actividades que realizan se informa que algunos de los jóvenes continúan concurriendo a la escuela y a actividades recreativas. No obstante y considerando los hechos ocurridos y las medidas tomadas, otros adolescentes han abandonado transitoriamente estos espacios. Asimismo hacemos saber que con los vecinos del barrio del Hogar CAINA varones se realizaron reuniones en donde fueron recibidas las inquietudes de estos y abordada esta problemática para poder darle una solución a partir de la cooperación mutua.

Es de señalar que al cierre de este informe la Cámara del Crimen de Viedma resolvió confirmar el sobreseimiento de varios funcionarios del Ministerio de Familia que se encontraban investigados por irregularidades en el funcionamiento de los Centros de Atención Integral de Niñez y Adolescencia de Viedma, hechos que fueron denunciados por esta Defensoría del Pueblo. (Ver Informe Anual periodo 2008).

No obstante ello, en su sentencia dos de los jueces de la Cámara sostuvieron que la instrucción llevada a cabo ha dejado en evidencia la deficiente preparación del personal, y aún de sus directivos para llevar a cabo la delicada misión de guiar a las menores allí internadas. Siendo así se ordena se investigue en nueva actuación las condiciones actuales gestión, las que deberán ser constatadas por el Ministerio Público Pupilar, y en caso de persistir las falencias, se intime al Ministerio de Familia para que se subsanen las mismas.

GUARDAS DE HECHO

Continuando con el trabajo de años anteriores en el presente periodo se continuó recepcionando el requerimiento de ciudadanos que petitionaron por el reconocimiento, ante la ANSES, de las sentencias judiciales que le otorgaban las Guardas de Hecho de los niños bajo su cuidado. Ello así para percibir el beneficio de las Asignaciones Familiares que aquella Aseguradora del Estado Nacional brinda a las familias con niños.

Cabe resaltar que se trata de ciudadanos, que cuentan con sentencias judiciales de los juzgados provinciales, y que pese a ello la ANSeS considera que no tienen derecho al pago de asignaciones familiares.

Es de señalar que los niños bajo Guardas de Hecho integran familias carentes de recursos económicos, cuyos padres se desempeñan en el trabajo no formal o son beneficiarios de planes sociales. Forman parte de familias ensambladas en las que comparten el hogar con abuelos y otros parientes.

Considerando que tales negativas constituyen supuestos de discriminación a la infancia se han efectuado innumerables gestiones ante el organismo nacional,

autoridades y legisladores, jueces y con la Defensora General de la Nación dependiente del Ministerio Público Federal.

Por orden de esta última se remitió al Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Viedma, Dr. Marcelo Sánchez, los antecedentes de reclamos de ciudadanos domiciliados en el ámbito jurisdiccional del Juzgado Federal, que abarca a las ciudades de Viedma, General Conesa, San Antonio Oeste, Sierra Grande, y Valcheta.

Está previsto efectuar lo propio con los Defensores Federales de San Carlos de Bariloche y de General Roca.

DERECHO A LA IDENTIDAD

Entendiendo el derecho a la identidad como uno de los derechos fundamentales del ser humano esta Defensoría colabora con los ciudadanos que se encuentran en la búsqueda de sus orígenes biológicos o de familiares en diferentes grados de parentesco.

Esta Defensoría integra también la ***Red por el Derecho a la Identidad***, de la que participan también la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Programa Antiimpunidad, y organizaciones de la sociedad civil.

Para acceder a los datos de los familiares que se buscan se solicita información al Registro Nacional de las Personas, al Juzgado Federal, a ANSES, a la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, entre otros organismos.

Es de mencionar la colaboración del Juzgado de Paz de Maquinchao en una de las situaciones traídas a conocimiento.

En el periodo que se informa, dos de las búsquedas arrojaron resultados positivos.

TRATA DE PERSONAS

La provincia de Río Negro según lo demuestran diferentes investigaciones judiciales, se ha convertido en lugar de destino de las redes de tratantes de personas. Las víctimas son captadas con fines de explotación sexual o laboral.

Entendiendo a la Trata de Personas como un delito que atenta contra los Derechos Humanos y la dignidad de la persona, esta Defensoría del Pueblo ha asumido en los últimos años el compromiso de contribuir en la difusión de este flagelo promoviendo la participación de diferentes organismos y de la comunidad. A partir de la sanción de la Ley 26.364, se lo tipifica como Delito Federal, no obstante ello desde esta Defensoría y el ministerio público provincial se continúa trabajando en la prevención del delito en nuestra provincia.

Así durante el presente periodo de gestión, junto con el Ministerio Público Fiscal se continuaron dictando talleres destinados a integrantes de organismos y organizaciones de la sociedad civil. En los mismos se abordó la problemática del delito de la trata de personas, la asistencia a las víctimas, la legislación y jurisprudencia vigente. Por otra parte, dado que el 80 % de las víctimas de trata son mujeres y niños, y siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se aborda la perspectiva de género.

Se propicia, con el dictado de estos talleres, el armado de redes interinstitucionales, y de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de trabajar en la prevención, la denuncia y la asistencia a las víctimas.

Los talleres se dictaron en las ciudades de Ing. Jacobacci, San Carlos de Bariloche y Viedma. La primera de estas ciudades, contó con la participación de referentes comunitarios y de organismos de toda la línea sur de la provincia, abordándose también la problemática de Abuso Sexual Infantil, a pedido de referentes de la comunidad de Maquinchao, dada la preocupación por el aumento de consultas por este delito.

Por otra parte, e Invitados por el Observatorio de Derechos Humanos de Gral. Roca, y la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino, FUNDESUR, se participó de la *Muestra Internacional de Comics, campaña de concientización sobre violencia de género*, donde se expuso la problemática de la Trata de Personas.

Al cierre de este informe, y bajo la organización del Programa Nacional Juana Azurduy, se dictaron talleres en la sede del Municipio de Viedma, y en el Colegio Secundario CEM N° 80 esa localidad.

Es de mencionar la preocupación de los jóvenes por obtener información acerca de este delito, por lo que desde esta Defensoría se encuentra en elaboración un proyecto para ser presentado ante el Ministerio de Educación, destinado a los alumnos secundarios de nuestra provincia.

Por otra parte, se participó de la reunión de la Comisión Especial de Derechos Humanos, para el tratamiento del proyecto de ley N° 385/09 que crea el Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas.

Esta Defensoría entiende la necesidad de avanzar en políticas públicas tendientes a abordar la problemática del delito de Trata de Personas, por ello insta a los representantes, tanto provinciales como municipales, a trabajar en la elaboración de las mismas, a capacitar a sus operadores, y a asumir el compromiso de trabajar interinstitucionalmente en la persecución del delito y en la asistencia a las víctimas.

Los tratantes de víctimas, sea esta con fines de explotación laboral o sexual, responden a una red organizada que esclaviza a personas y por ello es necesario afianzar las redes interinstitucionales y con la comunidad a fin de lograr una organización que permita brindar contención adecuada a las víctimas como así también propiciar la persecución del delito.

En nuestra provincia, la investigación más importante que se desarrolla relativa a trata de personas, es la que lleva adelante la Dra. Marisa Bosco, titular del Juzgado N° 30 de Choele Choel. Ello es así por las expectativas que ha generado en la sociedad a partir de las distintas vinculaciones, resultados obtenidos en la investigación, pero fundamentalmente por la participación que ha tenido la Policía Provincial. Al respecto se brindan detalles en el apartado correspondiente a la Policía de la Provincia de Río Negro, desarrollado más adelante en el presente informe.

TIERRA Y VIVIENDAS

IPPV

El derecho a la vivienda forma parte de los Derechos Sociales y Culturales. Es un derecho humanitario internacional reflejado en la Constitución Nacional y en la provincial, mediante el cual se reconoce al individuo el derecho al acceso a una vivienda digna. Todos los países, sin excepción, tienen algún tipo de obligación con respecto a la construcción de viviendas para sectores de bajos ingresos.

La demanda habitacional insatisfecha, ha sido motivo de gran número de reclamos tramitados por esta Defensoría del Pueblo en este periodo, sumándose a ello los inconvenientes presentados por familias que viven en condiciones sumamente precarias. Algunos esperan una respuesta de los organismos oficiales desde hace casi una década. Entre estos casos se cuentan familias que viven en el garaje de la casa de sus padres, padres con hijos discapacitados, y parejas de ingresos medios que no pueden pagar alquiler.

En Río Negro, la falta de tierras fiscales en la mayoría de los municipios, llevó al IPPV a firmar convenios con entidades intermedias, mediante la Resolución 1140/00 entidades que aportan las tierras y adjudican las unidades habitacionales, el Instituto controla que se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley FONAVI.

Los planes de demanda libre, instrumentados por el IPPV, fueron de baja incidencia en la construcción de viviendas.

El derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos, para aquellos que no llegan a cumplir con los requisitos del IPPV. El gobierno debería tener programas especiales, ya que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de pobreza, tienen derecho a esperar que su gobierno se preocupe de sus necesidades en materia de viviendas.

El Instituto de la Vivienda comenzó a construir viviendas para los ciudadanos con limitaciones físicas, cuestión que debe tenerse en cuenta a los efectos de construir una unidad habitacional que sea accesible para ellos, las mismas

deberán tener adaptaciones especialmente en los espacios de circulación, que permitan su utilización en las condiciones más adecuadas

La falta de viviendas llevo a familias carenciadas a la toma de terrenos, casas en construcción y barrios que estaban terminados y listos para su entrega a los preadjudicatarios.

El IPPV implementó el Registro Provincial Permanente de Demanda Habitacional. La información incorporada servirá de base para realizar el informe sobre la falta de viviendas.

El organismo ha implementado una intensiva política de cobro a deudores adjudicatarios de viviendas ante la falta de pago de las cuotas.

Debemos tener en cuenta que la vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros niveles de bienestar. Es el lugar donde las familias, reproducen las buenas costumbres, se propicia un desarrollo social sano, así como mejores condiciones para su inserción social y donde se establecen las bases para una emancipación individual y colectiva.

En todos los casos la información brindada por el Instituto de la Vivienda fue puesta en conocimiento de los reclamantes. Asimismo se brindó respuesta telefónicamente, en aquellos casos que requerían información sobre planes o requisitos para inscribirse.

Las respuesta del organismo en los mencionados expedientes, invariablemente han sido que en la actualidad no cuentan con viviendas disponibles y que el reclamo será tenido en cuenta en caso de contar con viviendas recuperadas. Sugieren que la reclamante se acerque a las agencias de cada ciudad a los efectos de ser inscripta en el Programa de Demanda Habitacional Permanente. Informan que los planes habitacionales en construcción, se realizan en su mayoría, a través de Entidades Intermedias, que son quienes inscriben en los terrenos que poseen, los que posteriormente son donados al IPPV para la ejecución y adjudicación de las unidades habitacionales, y adjudicados a los respectivos inscriptos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el FONAVI”.

Hemos recepcionado reclamos por solicitud de materiales de construcción para comenzar su vivienda o para terminar las mismas.

En Todos los casos se informó que por intermedio del programa “HABITAR EN FAMILIA”, dependiente de la Subsecretaria de Ministerio de la Familia, pueden tramitar la provisión de materiales, trámite que debe comenzar en las

Municipalidades porque es necesaria la intervención de un asistente social que determine el estado habitacional del grupo familiar solicitante.

BARRIO SANTA CLARA DE VIEDMA.

Sobre el inicio del año 2009 los vecinos autoconvocados de la toma del Barrio Santa Clara de la ciudad de Viedma solicitaron a esta Defensoría del Pueblo se intervenga ante la compleja situación habitacional en la que se encontraban envueltos.

Ante tal solicitud, personal de la Defensoría del Pueblo se hizo presente en el predio usurpado realizando un extenso relevamiento de la situación en su integridad social.

De ese informe surgió que al mes de Febrero de 2009, 134 familias viedmenses se encontraban ocupando las tres manzanas en cuestión, lo que públicamente se dio a conocer como la Toma del Barrio Santa Clara.

De ello surgió un extenso pedido de informes al Municipio local, solicitando, en carácter de colaboración, se sirva informar acerca de la disponibilidad de tierras y/o acciones tendientes a dar solución o tratamiento a la cuestión planteada.

TIERRAS FISCALES

Aparte de las temáticas típicas y puntuales respecto a la situación de ocupantes de predios fiscales como ser asesoramiento por cesión de derechos de ocupación, supuestas usurpaciones, cuestiones sucesorias, este año la problemática de tierras fiscales provinciales ha tenido otro cariz al plantearse cuestiones que hacen más a la política de tierras y a los precios de las tierras ofrecidas en venta por el Estado Provincial.

Las cuestiones suscitadas por el traspaso de tierras de la provincia a un Municipio (Ingeniero Jacobacci, y San Antonio Oeste) han motivado la formación de expedientes en los cuales nos encontramos con un silencio absoluto de los organismos municipales de las localidades indicadas en especial la de Ingeniero Jacobacci. Esta situación ha dificultado el accionar de este órgano de control y mantiene la angustiosa incertidumbre del ciudadano que reclama por sus derechos.

Especial atención merecerá de nuestra parte en lo sucesivo la venta de tierras en la zona andina de nuestra provincia, particularmente aledañas a El Manso y El Foyel adonde los precios establecidos resultan sumamente bajos en relación a los valores inmobiliarios establecidos en el mercado local, nacional e internacional.

A modo de ejemplo podemos citar el caso de 32 has aledañas a El Bolsón que se vendieron por \$ 25.948,89 siendo su valuación Fiscal de \$ 85.550,76 y la Valuación Fiscal para el cálculo del Impuesto Inmobiliario de \$ 51.330,46. El propio Estado vendió a un precio notoriamente inferior al valor fiscal de la tierra lo cual será ampliamente investigado.

Reclamo de Pueblos originarios

Desde la localidad de Comallo, la Flia. Loncón denunció ante esta Defensoría del Pueblo haber sido desalojada por la fuerza de las tierras que manifiestan ocupar desde tiempos ancestrales y que por ende sostienen que les pertenecen, habiéndose registrado en el procedimiento abusos por parte de la fuerza pública.

Ante este caso, tal vez emblemático de una situación que se viene replicando en los últimos tiempos, según muestran numerosas publicaciones periodísticas, se solicitaron informes tanto a la Policía de Comallo como a autoridades judiciales implicadas, así como se solicitó y se intervino personalmente ante el Municipio de la mencionada localidad a los fines de que se brinde asistencia social a las reclamantes, debido a que, a partir de la situación de desalojo, se han encontrado sumidas en difíciles situaciones sociales.

Además de ello hemos mantenido encuentros con el equipo asesor del CODECI, quien lleva adelante la causa de la Flia. Loncón ante las correspondientes autoridades judiciales.

TEMAS PREVISIONALES

En el periodo que se informa se repite como todos los años, la problemática de las demoras en los trámites previsionales.

En ello aludimos a expedientes de jubilaciones, pensiones por fallecimiento, retiros por invalidez, asignaciones familiares y bonificaciones por zona austral o reajustes por movilidad.

Muchas veces las demoras obedecen a cuestiones referidas a la falta de documentación presentada por el ciudadano, o a la ausencia de reclamos formales presentados ante el organismo previsional. Lo cierto es que dichas demoras repercuten sobre la “urgencia” o “necesidad inmediata” que evidencian los presentantes.

Desde este organismo de control hemos interactuado permanentemente con las distintas UDAI u oficinas de la ANSeS.

Especialmente agradecemos la colaboración brindada por los Jefes de las UDAI de ANSeS de General Roca, Cipolletti, Viedma, San Carlos de Bariloche, y oficinas de Villa Regina, San Antonio Oeste, y Choele Choel entre otras. Nuevamente agradecemos la colaboración de las autoridades del Área de Requerimientos del Defensor del Pueblo de la ANSeS Central

Los mecanismos de actuación con las oficinas previsionales se dan a través de correo electrónico, teléfono, fax y notas. Es decir, preferimos procurar utilizar la vía informal para el “destrabe del conflicto” o para brindar un correcto asesoramiento al presentante. Para situaciones de mayor complejidad, o que

requieren mayores estudios, efectuamos solicitudes de informes por notas, con basamento en las disposiciones previstas en el art. 12 de nuestra ley orgánica.

Ello porque en definitiva, las actuaciones previsionales no se encuentran bajo el alcance directo de competencia de esta Defensora, recurriendo entonces a la colaboración de los organismos nacionales.

Al igual que informamos el pasado año, esta Defensora ha instado el reclamo individual del ciudadano afectado ante los responsables de brindar respuestas. Estamos convencidos de que los reclamantes deben tener compromiso ciudadano, haciendo valer por si mismos sus derechos y cuestiones ante la administración.

El compromiso ciudadano supone la existencia de un ciudadano educado democráticamente en defensa de sus derechos.

Y este detalle no es menor, cuando asistimos a un cuestionamiento a nuestra sociedad, precisamente por la falta de compromiso con uno mismo, con el otro y con las instituciones.

Es de destacar que por ley 26.425 se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se deroga el régimen de capitalización. Dicha ley comenzó a regir el 8 de diciembre de 2.008.

De esta manera la ANSeS absorbe a los trabadores activos del régimen de capitalización y se hace cargo de los trámites previsionales y beneficiarios del régimen privado.

Pero, la aplicación práctica del renovado sistema previsional, generó inconvenientes con los beneficiarios de AFJP, entre ellos, la diferencia en los calendarios de pagos, el pago de las bonificaciones por zona austral, las demoras por reclamos iniciados ante la AFJP y ulterior derivación al organismo nacional, etc.

Por ello durante el presente año hubo reclamos relacionados con esta especial situación.

Es necesario destacar que nos encontramos estudiando la legislación que dispone el pago de la bonificación por zona austral (ley 19.485 del año 1.972). El adicional no remunerativo es destinado a los jubilados y pensionados de Cajas Nacionales de Previsión Social que estuvieran radicados en las provincias patagónicas. Condición del derecho al pago del mismo, es la radicación territorial en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego. Con posterioridad se agregó a la provincia de La Pampa y al Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Ello implicaba que aquellos beneficiarios del régimen de capitalización sin componente público de ANSeS, no cobraban la bonificación en cuestión.

Ahora con la creación del SIPA observamos que estamos en presencia de “ex beneficiarios del régimen de capitalización”, y que pese a la alegada falta de componente público, creo firmemente que corresponde el pago de la bonificación por zona austral.

Por ello estamos estudiando en profundidad el tema, para evaluar las alternativas posibles de acción que encauzaré por este derecho que creo no se está cumpliendo.

Ya en el terreno de las estadísticas, podemos afirmar desde un aspecto general que se han tramitado 147 actuaciones vinculadas a cuestiones previsionales.

Las cuestiones previsionales, abarcan reclamos, consultas y solicitudes por pago de reajustes de haber, zona austral, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, divergencias entre las AFJP y la ANSeS, aumentos previsionales, etc.

De ellas un total de 30 han sido solucionadas. Se encuentran concluidas por haberse brindado el debido asesoramiento un total de 52 actuaciones.

Junto a los expedientes en trámite, suman un total de 65 actuaciones, de las cuales muchas de ellas se encuentran en etapa de espera para conclusión por haberse asesorado a los ciudadanos sobre los medios legales para intervenir en sus propios trámites, o por solución de los mismos.

En otro orden de cosas, debemos destacar que desde esta área se tramitan otras cuestiones relacionadas con asesoramientos laborales, y de derecho privado.

Seguro de Vida de I.A.P.S. para mayores de 80 años

Como se informara en la pasada exposición de esta Defensora del Pueblo, hemos trabajado mucho con la cuestión del seguro de vida para mayores de 80 años de edad.

La ley 4.232, reformó el Sistema Previsional Solidario y Obligatorio de Vida e Incapacidad, e instituyó el pago del Seguro de Vida para aquellos beneficiarios que tengan la edad de 80 años.

A las actuaciones N° 157/08, 502/08, G.242/08, y G294/08 se le adicionaron en el período informado las gestiones G358.08, G86.09, y G97.09.

Como es de público conocimiento, solicitamos informes a la Secretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos de la Provincia, y al Directorio del I.A.P.S. obteniéndose como respuestas que se estaba trabajando en su reglamentación.

El directorio del I.A.P.S. responde con fecha 08 de octubre de 2008 que la reglamentación del art. 56 se encontraba en la Fiscalía de Estado.

Con fecha 15 de mayo de 2009 nos pronunciamos por medio de la Resolución N° 49/09 DPRN en la cual recomendamos al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Dr. Miguel Ángel SAIZ que disponga la inmediata reglamentación y ejecución del artículo 56 de la ley L 4.232. Además puse en conocimiento del

resolutorio, al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial y al Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

Sin perjuicio de que en el apéndice documental se encuentra el texto completo de la resolución, destacamos algunos considerandos:

- Que se advierte una considerable mora de la administración en dictar la reglamentación necesaria para asegurar el pleno ejercicio operativo del derecho a percibir el seguro con 80 años de edad.
- Que nuestro sistema constitucional, pone en cabeza del órgano legislativo la facultad de sancionar normas jurídicas, que configuran el derecho positivo vigente.
- Que asimismo se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar leyes con el objeto de precisar técnicamente los alcances de las leyes.
- Que este proceso garantiza la división de poderes, o de funciones (de acuerdo a la doctrina constitucionalista moderna), que hacen a una república democrática.
- Que la demora en reglamentar, afecta este juego de poderes, al convertir en letra fría a la norma jurídica.
- Que no sólo se trastoca la división de funciones republicanas, sino que se vulneran los derechos reconocidos o regulados en la norma incompleta.
- Que no es intención de esta Defensora del Pueblo, que la omisión de reglamentación deba subsanarse por la vía jurisdiccional.
- Que apelando a un ejercicio correcto de las facultades administrativas del Sr. Gobernador, se torna necesario efectuar una recomendación solicitando la pronta reglamentación y ejecución del artículo 56 de la ley L 4232.

Con fecha 21 de mayo recibimos la respuesta de la Secretaria Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos, Dra. Silvia Jañez, informando que se ha emitido el Decreto Provincial Nº 274 de fecha 20 de mayo de 2009 por el cual se dispone la Reglamentación del Artículo 56º de la Ley L Nº 4.232...”

El Decreto dispone su implementación progresiva por única vez, a fin de no afectar la solvencia del sistema solidario del I.A.P.S. En todas las etapas se implementará conjuntamente con aquellos afiliados de 80 años o más que padezcan de alguna enfermedad terminal.

Es importante aclarar que la percepción del seguro “anticipado” excluye al afiliado del sistema de la ley, por lo tanto los beneficiarios no tendrán derecho a percibir prestaciones por muerte, sepelio, cremación o traslado.

Si bien son cuestionables algunos detalles de la reglamentación, como ser la postergación y diferenciación de los adultos por edades, que incluso han originado juicios por exceso en la reglamentación, es importante que se haya propiciado la misma, configurándose un paso adelante.

Solicitudes de atención de ANSeS en zonas rurales y mejoras en bocas de pagos

Por actuaciones G.376.08 y 388.09 se tramitó el presente asunto referido a solicitudes de atención de personal de ANSeS en zonas rurales de nuestra provincia, donde se dificulta el acceso de los vecinos a servicios básicos, incluyendo la información y atención de las cuestiones previsionales.

La petición de los ciudadanos de la comunidad de Pilquiniyeu del Limay de recibir la visita de personal de la ANSeS al paraje para recabar trámites de pensiones, jubilación, tutelas y asignaciones familiares, tramitó por G.376.08.

Cabe aclarar que se trata de una comunidad de la zona precordillerana, donde se torna muy dificultoso trasladarse hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche para efectuar los trámites, pues no existe transporte público de pasajeros en el paraje, debiendo contratar un vehículo por cuenta propia.

Fue así que con fecha 9 de diciembre de 2008, remití sendas solicitudes de colaboración a la jefatura de la UDAI de San Carlos de Bariloche de la ANSeS y a la Jefatura Regional Sur 1 de la ANSeS con sede en la ciudad de Neuquén. Recibimos respuesta de la Sra. Jefa de la UDAI de S. C. de Bariloche, Sra. Mabel Rolando, disponiendo su colaboración para operativos de personal del organismo previsional para trasladarse al paraje citado.

Por actuación 388.09, con fecha 17 de abril de 2009 derivamos otra solicitud a la Jefa de la ANSeS de S. C. de Bariloche en referencia a la presentación de ciudadanos de los parajes de Cerro Alto, Corralito, Paso de Los Molles, Villa Llanquín, Panquehuao, Pichi Leufu Abajo y demás zonas aledañas rurales.

Los vecinos solicitaban el pago de sus jubilaciones y pensiones en sus parajes, en razón de no existir ningún tipo de transporte público de pasajeros, dificultándose en época invernal por obvias razones.

Recibimos respuesta satisfactoria por parte de la Gerente de ANSeS, dando cuenta de las gestiones con el Correo Argentino y la Intendencia de Pilcaniyeu para disponer del vehículo municipal.

Agradecemos la especial colaboración de la Sra. Jefa de la UDAI de San Carlos de Bariloche, Mabel Rolando por haber contribuido a la solución de los planteos.

En el marco de las actuaciones G81.09 se tramitó la presentación referida a la falta de sucursal del Banco Nación en Luis Beltrán, debiendo los beneficiarios de prestaciones asistenciales y previsionales percibir sus haberes a través del Correo Argentino. Las instalaciones de la empresa postal son precarias. Los días de pago, los beneficiarios se encuentran expuestos al frío, calor y viento, pues se producen largas colas en la calle. Normalmente el dinero para pagar llega con retraso, debido al sistema administrativo del Correo Argentino. El Municipio ofrecía las instalaciones comunales para efectuar los pagos en horario de tarde. Solicitamos la colaboración del Sr. Cristian Michelsen, de la Gerencia Asuntos Interjurisdiccionales de la ANSeS.

Desde la Gerencia de Gestión de Pagos del organismo previsional se respondió que idéntica consulta habían recibido de la localidad de Lamarque. Con posterioridad se informa de las gestiones encauzadas. Los primeros días de

octubre personal de ANSeS y del Correo Argentino estuvieron en las localidades mencionadas para procurar la solución de los inconvenientes. Encontrándose en espera la presente temática.

Ochenta y dos por ciento móvil (82 % móvil)

Como informáramos en anteriores exposiciones la tutela de los derechos previsionales de los ciudadanos rionegrinos es una prioridad para esta Defensora del Pueblo.

Desde la Transferencia de la Caja Previsional Provincial a la Nación, en el año 1.996, se comenzó a aplicar la legislación nacional (leyes 24.241 y 24.463) que limitó el derecho previsional garantizado por la Constitución Nacional y Provincial: la movilidad.

La movilidad previsional debe garantizar que exista una razonable proporcionalidad entre los haberes de un trabajador en actividad y los haberes jubilatorios. La proporcionalidad debe conllevar el mantenimiento del mismo nivel de vida que se tenía en actividad, en lo relativo a las necesidades de alimentación, vivienda, educación, y salud.

La Corte Suprema de Justicia Nacional ha entendido que debe existir una necesaria proporcionalidad entre los haberes de actividad y pasividad.

Las jubilaciones ostentan una naturaleza sustitutiva: la jubilación sustituye a la remuneración que el beneficiario percibía durante su actividad laboral, en una proporción justa y razonable.

Entendida la movilidad previsional de esta manera, sabido es que en nuestra provincia contamos con una cláusula constitucional de importante contenido social y protector: el derecho al 82 % móvil (art. 40 inciso 9º de la Constitución Provincial).

Con el fin de solicitar el pago del 82 % móvil para todos los jubilados rionegrinos de los tres poderes del Estado Provincial, de la administración pública descentralizada, de los organismos de control y los Municipios, en relación con el haber que perciben los trabajadores en actividad, hemos efectuado recomendaciones al Gobernador, solicitudes a la ANSeS, incluso una demanda de Amparo Colectivo –Mandamus contra la Provincia de Río Negro, Poder Ejecutivo Provincial, que fuera desestimada por el Superior Tribunal de Justicia, como ya se informó el pasado año.

Suscitó mucho debate, discusión, reuniones, y oposiciones gremiales, el tratamiento legislativo del proyecto de ratificación del Acta Complementaria al Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la provincia de Río Negro a la Nación, suscripta el 15 de junio de 2.007 entre los Poderes Ejecutivos de la Provincia de Río Negro y la Nación, relativa a la aplicación de los artículos 8 a 17 y 26 a 33 de la ley nacional 24.018 a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Provincial.

Finalmente con fecha 24 de septiembre de 2.009 fue aprobado el proyecto bajo el número de ley 4.449.

Llama la atención la redacción plasmada en el art. 2 de la ley: *“El Poder Ejecutivo provincial continuará llevando adelante ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), las gestiones necesarias para la aplicación en la provincia, de lo dispuesto por la ley nacional nº 24018 y sus modificatorias, haciendo extensiva la aplicación del porcentaje de ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondientes al cargo en actividad, a todos los agentes públicos provinciales que en la actualidad perciban beneficios previsionales de dicho organismo y a los que en el futuro accedan al mismo.”*

Es una expresión de deseos, que ojalá sea más que eso.

Reglamentariamente se dispuso que para no resentir el servicio de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia conducirá la implementación del nuevo régimen previsional especial y coordinará con el funcionario o magistrado que, al entrar en vigencia la norma, cumplimentará los requisitos establecidos en la Ley 24.018 al momento de hacer efectiva su baja, teniendo en cuenta los procedimientos previstos en la Constitución Provincial.

Mientras tanto, y como consecuencia del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (Aban, Francisca c/ ANSeS-CSJN del 11/08/2009) en el que se reconoció el derecho de una jubilada de la provincia de Jujuy, a percibir su haber previsional sin topes, encomendamos a nuestros asesores legales a estudiar la presente cuestión.

Cabe resaltar que el fallo se trató de una jubilada que accedió al beneficio antes de la transferencia de la Caja de Jujuy, y se entendió que adquirió el derecho a percibir el 82 % móvil y sin la aplicación de los topes de la ley de solidaridad previsional 24.463.

Este nuevo antecedente del máximo organismo jurisdiccional, renueva las esperanzas acerca de la protección de los derechos de nuestros adultos mayores.

Por ello, como Defensoría del Pueblo ratificamos los argumentos técnicos propiciados acerca del derecho al 82 % móvil para nuestro jubilados:

- Se encuentra vigente.
- Se encuentra garantizado en la Constitución Provincial y Nacional.
- La omisión de aplicar un derecho operativo, constituye una violación de la Constitución por omisión.

Convencidos de la existencia de la conculcación del derecho, decidimos nuevamente reclamar judicialmente la movilidad previsional, pero esta vez ante la Justicia Federal con asiento en nuestra Provincia.

Por ello convocamos a los jubilados de la provincia de Río Negro, comprendidos en el ámbito jurisdiccional del Juzgado Federal de General Roca a acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para asesorarse sobre el reclamo judicial del 82 % móvil.

Asimismo concurrimos a las ciudades de Choele Choel, General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Río Colorado, entre otras, recabando datos y documentación de ciudadanos rionegrinos beneficiarios previsionales.

La estrategia procesal de esta Defensora del Pueblo será reclamar primeramente ante el Juzgado Federal de General Roca y con posterioridad ante las jurisdicciones de los Juzgados Federales de Viedma y de San Carlos de Bariloche.

En los próximos días presentaremos las demandas judiciales ante el Juzgado Federal de General Roca.

Honorarios de gestores, y abogados por trámites previsionales

Detectamos la existencia de personas que actuando como apoderados, gestores o abogados ante ANSeS y organismos asistenciales, cobran sumas que superan lo permitido por el artículo 5 de la ley 17.040 (hasta dos haberes) a los adultos mayores y demás personas con vulnerabilidad social para realizar tramites de jubilación, pensiones por fallecimiento, salario familiar, y pensiones asistenciales.

Se tramitaron actuaciones concretas denunciando a un abogado de la ciudad de Olavarria, provincia de Buenos Aires, que percibía honorarios excesivos por trámites previsionales.

Remitimos el reclamo a la UDAI de la ANSeS de Viedma y al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Azul, para que actúen conforme su competencia. El Colegio de Abogados de Azul respondió que la actuación correspondía a su par de Viedma.

También remitimos notas Colegio de Abogados de Viedma (CAV), y a la Dra. Isabel Lovrinkevich, a cargo de la Gerencia Investigaciones Especiales ANSeS. El Colegio de Abogados de Viedma intimó al letrado involucrado para que se abstenga de ejercer actos profesionales o en su defecto proceda a matricularse como corresponde.

La Gerencia de Investigaciones Especiales de ANSeS se encuentra avocada al reclamo contra el profesional.

Valiéndome del antecedente efectuamos comunicados de prensa tendientes a informar a los jubilados sobre sus derechos. Así se aclaró que no existe norma jurídica alguna que exija tener representantes (abogados, contadores y demás gestores), para actuar ante la ANSeS. Es decir los trámites ante ANSeS y Comisión de Pensiones Asistenciales, son personales y gratuitos.

Finalmente, en colaboración con la Jefatura Regional Sur I de la ANSeS con asiento en la ciudad de Neuquén, acordamos trabajar conjuntamente para controlar que no sucedan estos abusos a los jubilados por parte de profesionales o gestores inescrupulosos.

Demoras en la implementación de los aumentos policiales al sector pasivo

Por medio de las actuaciones 1325.08 y 1105.09 corren reclamos de ciudadanos, retirados de la Policía de la Provincia de Río Negro.

Si bien la obligación de pago a los retirados policiales se encuentra a cargo de la ANSeS, el régimen previsional policial, no ha sido transferido a la Nación. Por ello los pasivos policiales tienen el derecho a cobrar haberes móviles relacionados con los haberes de los policías en actividad.

Los reclamos concretamente apuntan al oportuno pago de los aumentos al sector pasivo policial, conforme lo preveía expresamente el artículo 90 de la ley 2.432.

Solicitamos informes a la Unidad de Control Previsional –UCP y a la Secretaría de la Función Pública. Se responde aduciendo que el procedimiento técnico para aplicar los aumentos, es complejo en virtud de intervenir dos organismos (UCP-provincia de Río Negro y ANSeS), y que si bien se demora la implementación de los aumentos por movilidad, se abona con los debidos retroactivos.

Esto es cierto, pero también es cierto que los reajustes por movilidad deben ser aplicados más rápidamente para garantizar el constitucional carácter sustitutivo del haber de pasividad. Por ello recientemente he solicitado la colaboración de la Gerencia de Asuntos Interjurisdiccionales de la ANSeS, en atención a que las intervenciones jurisdiccionales generan que las implementaciones de los aumentos tengan atrasos de varios meses (seis, ocho, etc.). Nos encontramos en espera de respuesta al pedido de colaboración.

La emergencia financiera y el decreto 80/09 del Poder Ejecutivo Provincial

Con fecha 24 de marzo de 2.009 el titular del Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 80/09, que establecía a partir del 01 de abril de 2.009 que el haber máximo a abonar en el ámbito del “... *Poder Ejecutivo Provincial y Sociedades del Estado Provincial*...” no podía superar al del cargo del Gobernador.

Se inician actuaciones administrativas en este organismo de control, bajo el número 504/09 “DPRN” caratuladas: “Defensora del Pueblo de Río Negro s/ Decreto 80/09”, disponiéndose el estudio de la cuestión.

Sustancialmente consideramos que el Decreto era infundado, arbitrario, confuso, contradictorio, y desprolijo, tornándose inconstitucional de manera manifiesta.

Era infundado por no acreditar el “desequilibrio financiero” al que se aludía, solo se trataba de una afirmación dogmática.

No respetaba los requisitos fundamentales establecidos por la Corte Suprema de la Nación al no motivar, no fundar, no fijar límites temporales, alterando la sustancia de la contratación de empleo público.

Se configuró una vulneración de los caracteres de intangibilidad, irrenunciabilidad y alimentario del concepto jurídico de salario. En algunos casos se configuraron reducciones confiscatorias.

Consideramos que era también arbitrario y excesivo de la facultad otorgada al Gobernador por el artículo 181 inc. 1 de la Constitución Provincial.

La contradicción fue advertida porque apenas 15 días el Poder Ejecutivo había otorgado a toda la Administración Pública un aumento salarial general.

Se trató de un fundamento dogmático, invocando la reducción del gasto, sin considerar que la forma, contenido y circunstancias del decreto eran pasibles de innumerables juicios contra la provincia, conllevando probables y mayores costos judiciales.

Por ello, ante la ausencia de temporalidad en el decreto, la perpetración de confiscatoriedad en los descuentos y en consecuencia, la alteración de la esencia del contrato de empleo público, con fecha 14 de mayo de 2.009 nos pronunciamos por medio de la **Resolución Nº 48/09**, recomendando al Gobernador de la Provincia de Río Negro, que reconsidere la medida, disponiendo la derogación por contrario imperio del decreto Nº 80/09, o su anulación.

En el apéndice documental se encuentra el texto completo de la resolución, no obstante ello destacamos algunas argumentaciones plasmadas:

- Que entre los considerandos del decreto en cuestión se alude a las facultades otorgadas por el artículo 181 inc. 1 de la Carta Magna Provincial.
- Que esta norma determina que el Gobernador es el jefe de la administración pública provincial y el ejecutor de las leyes.
- Que de dicho norma suprallegal, no surge la autorización para reducir haberes de empleados y agentes de la administración pública.
- Que para ello debió utilizarse el mecanismo determinado en el inciso 6 del artículo 181 de la Carta Provincial, es decir la vía de los decretos conocidos como de “necesidad y urgencia”.
- Que debió haberse dictado en acuerdo de Ministros, remitiéndose a la Legislatura en el plazo allí previsto, circunstancias totalmente ausentes aquí.
- Que la Corte Suprema de Justicia Nacional le ha puesto límite a la discrecionalidad (potestad estatal) de alterar normativamente los márgenes de la retribución, por razones de emergencia.
- Que la doctrina laboralista afirma que el sueldo goza de la protección brindada por el principio de irrenunciabilidad, de modo tal que el contrato de trabajo no puede ser alterado, restringido o suprimido en perjuicio del trabajador.
- Que también lo ampara la garantía de intangibilidad, en la medida en que resulta nula su reducción por debajo de los mínimos garantizados por el orden

público laboral (derechos reconocidos por las normas que integran el bloque de legalidad laboral).

Advertimos que el sector docente era el más afectado por el decreto. Finalmente con fecha 22 de mayo de 2.009 el Gobernador por decreto 3304/09 corrigió el grosero error, exceptuando a los empleados docentes de los topes, en sintonía con la recomendación formulada en las presentes actuaciones por el artículo 1º de la Resolución N° 48/09.

Por ello se concluyeron las actuaciones, en virtud de haberse arribado a la solución del conflicto.

CONFLICTO EMPLEADOS MUNICIPALES DE GRAL. ROCA

En las actuaciones N° 396/09 se trató el conflicto por reivindicaciones salariales de los trabajadores municipales con la comuna de General Roca. Se solicitaron informes en carácter de colaboración al Municipio en cuestión y a la Secretaría de Trabajo provincial.

La huelga y los descuentos por días de paro, necesariamente involucran el Derecho Constitucional consagrado en el artículo 14 bis y Tratados Internacionales de Derecho Humanos, que nuestro ordenamiento debe respetar.

La huelga es un derecho colectivo del trabajo.

Si no se declara su ilegalidad, no existe razón jurídica válida para efectuar descuentos por días no trabajados, pues ello implica actuar como si la medida de fuerza fuera ilegal.

El empleador cuenta con herramientas administrativas y judiciales suficientes, para cuestionar el paro; si no actúa antes, no puede legítimamente proceder al castigo del trabajador, por el simple hecho de defender sus derechos de manera regular, legítima, legal y fundamentalmente constitucional.

El trabajador que defiende sus derechos, y ejerce la huelga de manera regular, actúa legalmente, con compromiso ciudadano.

En definitiva, creemos que el descuento por días u horas de paro aplicado a los trabajadores, cuando la medida de fuerza no ha sido declarada ilegal, vulnera la Constitución Nacional.

¿Es constitucional que el empleador disponga la aplicación de descuentos por días de huelga o paro?

Adelantamos nuestra opinión en sentido negativo.

El empleador (sea privado o público) no puede disponer unilateralmente los descuentos por huelga, pues de esta manera está vulnerando la Constitución Nacional.

Lo anterior debe diferenciarse de otras cuestiones vinculadas con los cortes de rutas, cuya metodología no parece encontrar sustento normativo que permita inferir su justificación, cuestión que estimo desarrollaré con mayores precisiones en el informe in voce, por encontrarse bajo estudio de mis asesores legales.

POLICIA DE RIO NEGRO

La Defensora del Pueblo viene advirtiendo, desde el inicio de su gestión en Setiembre de 2006, acerca de la deteriorada imagen de la Policía Provincial, a tenor de las distintas irregularidades que afectan el desempeño de la Institución, en especial las violaciones a los derechos humanos.

Así, en los sucesivos informes anuales y sus respectivos informes in voce brindados ante la Legislatura provincial al inicio de cada período de sesiones ordinarias, se ha expuesto acabadamente la situación por la que atraviesa la Policía Provincial.

Cabe destacar que la Recomendación formulada al Sr. Gobernador de la Provincia con fecha 27 de Mayo de 2008 mediante Resolución N° 83/08 “DPRN”, fue ignorada prácticamente por completo, motivo por el cual recobra vigencia gran parte de lo allí expuesto, correspondiendo destacar alguno de sus párrafos, sin perjuicio de su transcripción completa en el Anexo correspondiente, a saber:

“... Resultado de una tarea exhaustiva de constataciones y relevamientos en todo el territorio provincial, sumado a ello... las denuncias de las actuaciones administrativas en trámite, así como el valioso aporte de los medios de prensa que día a día reflejan datos incontrastables de la realidad, esta Defensora del Pueblo considera oportuno formular una recomendación al titular del Poder Ejecutivo Provincial, máxima autoridad de la Policía Provincial, para que se sirva arbitrar con la mayor premura, las medidas conducentes tendientes a revertir la situación descripta por la que atraviesa la Institución Policial en la provincia de Río Negro... La presente recomendación persigue la noble intención de componer la deteriorada imagen de la Policía, Institución tan importante y tan necesaria para la sociedad rionegrina en la tarea de prevención del delito, por lo que debiera ser entendida como muestra de colaboración en la construcción de las políticas públicas...”

La fundamentación del citado acto administrativo contiene un pormenorizado análisis de la situación, destacando como aspectos más significativos la reiteración de casos de apremios, abusos y represión desmedida por parte de la Policía, la inseguridad y la demanda constante de mayor presencia de efectivos policiales en las calles, capacitados y bien equipados, el funcionamiento deficiente de los consejos locales de seguridad ciudadana, las insólitas y desacertadas decisiones políticas de la Fuerza que comprometen el prestigio y buen nombre de la Institución Policial, como el sostenimiento en sus puestos de trabajo de Comisarios cuestionados, o del propio Jefe de la Policía, las desafectaciones de servicio solicitadas como medida preventiva que fueron sistemáticamente desatendidas, sumarios administrativos por problemas de salud o por presuntos actos de indisciplina que no se resuelven, privando a

muchos de los agentes de la percepción de sus salarios durante meses o años, situaciones de extrema injusticia que han llevado a familias enteras a la indigencia total.

Se destacaban asimismo presuntos casos de corrupción policial, con relación a los cuales formulé las correspondientes denuncias, tanto en sede administrativa ante el Auditor General de Asuntos Internos de la Policía Provincial (por entonces recientemente designado), como ante la justicia penal respecto de aquellas irregularidades que excedían lo administrativo y podían configurar delitos.

En efecto, con fecha 18-05-09 solicité al Auditor General de Asuntos Internos promueva investigación en los términos de la Ley de Seguridad Pública N° 4200, respecto de distintas irregularidades administrativas en el seno de la Policía Provincial, solicitando asimismo me mantuviera informada sobre las medidas a adoptar y los eventuales avances en la investigación.

Con relación a esta solicitud no tuve respuesta de ningún tipo, circunstancia que fue puesta en conocimiento del nuevo Ministro de Gobierno, el cual tampoco respondió sobre la suerte de la denuncia formulada.

Por otra parte, también con fecha 18/05/09, y tal como lo había anunciado en el informe in voce, hice una presentación ante la Fiscalía de turno de Viedma, acompañando denuncias y demás constancias documentales incorporadas al expediente administrativo N° 536/08 "DPRN" caratulado "S/ Investigación por Presuntas irregularidades", solicitando se investigue la presunta comisión de ilícitos penales por distintas irregularidades en el seno de la fuerza, solicitando se profundice la investigación y se activen los mecanismos procesales pertinentes.

Sin perjuicio de las referidas denuncias, quiero informar en este acto que siguen llegando a la Defensoría del Pueblo denuncias anónimas, correos electrónicos y presentaciones espontáneas de ciudadanos (por lo general se trata de policías en actividad o retirados que prefieren no dar a conocer su identidad por razones obvias), las que dan cuenta de distintas y variadas irregularidades en el seno de la Fuerza y en la cúpula policial.

Vale decir que la situación actual de la Policía provincial no ha variado significativamente con relación a la expuesta en ocasión del informe anterior.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.-

Apremios ilegales.

Sigue siendo alarmante la cantidad de casos de apremios ilegales y el accionar desmedido de la Policía Provincial. Basta con leer los Diarios para darnos cuenta que nuestros jóvenes siguen siendo golpeados y maltratados.

A modo ilustrativo, en los últimos tres meses hemos podido leer estos títulos en los diarios, entre los más destacados:

- "Un policía condenado por lesiones graves" (Diario Río Negro, 16-12-09)

- “Madre de un menor denuncia abuso de autoridad policial” (Diario Noticias de la Costa, 10-12-09)
- “Violencia Policial: Río Negro con índices elevados” (Diario Río Negro, 07-12-09)
- “Alegatos por brutal paliza policial” (Diario Río Negro, 02-12-09)
- “La violencia policial en Río Negro” (Correo de la Comarca, 26-11-09)
- “Apremios en el Bolsón” (Página 12, 15-11-09)
- “Certifican denuncias de apremios en el Bolsón y Bariloche” (Agencia APP, 23-10-09)
- “Denuncian golpiza policial a un joven” (Diario Noticias de la Costa, 25-10-09)
- “Piden prisión e inhabilitación a un policía por vejámenes” (Diario Río Negro, 08-10-09)
- “Denuncian golpes y torturas a un joven en Comisaría de El Bolsón” (Diario Noticias de la Costa, 05-10-09)
- “Informe (CORREPI) describe la represión del aparato estatal” (ADN, 07-12-09).

Advierto con preocupación, Sres. Legisladores, el estado de pasividad de las víctimas y de sus familiares, prácticamente se ha naturalizado que la Policía cometa apremios y abusos. La gente tiene miedo de denunciar, la gente sabe que los policías golpeadores lo hacen con total impunidad porque las sanciones son menores, la gente no tiene ganas de ir a las fiscalías a denunciar porque los juicios son largos y porque las condenas no se cumplen, la gente no quiere ir a las comisarías porque no les toman las denuncias.

Uno de los casos más horribles es el de Daiana Allapán, la menor de 20 años que en junio de 2009 terminó internada en el Hospital Zatti de Viedma a causa de una brutal paliza que le habrían propinado efectivos policiales a la salida de un boliche. La menor perdió varias piezas dentales, y sufrió fractura de maxilar por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente y le colocaron una prótesis. Los efectivos policiales involucrados fueron apartados en un primer momento de sus puestos, pero al poco tiempo uno de ellos siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. Es justamente el policía que vive a unas pocas cuadras de la familia Allapán y que diariamente tienen que ver uniformado.

La respuesta brindada por la Jefatura en este caso puntual contrasta absolutamente con la realidad:

“Queda debidamente establecido que este Comando Superior, no tolerará ningún hecho de vehemencia injustificada que pudiera comprometer el normal funcionamiento de nuestra Institución; prueba de ello lo constituye el total compromiso institucional de capacitar e inculcar los fundamentos esenciales establecidos en las normas nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos (fdo). Crio Víctor Cufré. Jefe de la Policía”.

También quiero destacar la intervención de la Defensoría del Pueblo en dos denuncias puntuales de apremios y accionar policial desmedido en General Conesa, con víctimas menores de edad . Con relación a los cuales, con fecha 29/06/09 se cursó nota al Sr. Auditor General de Asuntos Internos de la Policía, manifestándole:

“... Pongo en conocimiento del Señor Auditor, que existe en la localidad de Gral. Conesa un marcado repudio de la sociedad hacia los desbordes y el accionar desmedido de la Policía local, y una sensación de temor que va en aumento, por lo menos en la franja de los jóvenes de la localidad. El reclamo de la ciudadanía se traduce en la necesidad de implementar medidas correctivas y ejemplificadoras que compongan la deteriorada imagen de la policía, apartando a los violentos de la Fuerza. Es por ello que esta Defensora quiere expresar claramente su preocupación, indignación y estupor por los hechos acontecidos. Y el anhelo de que no vuelvan a reiterarse en ningún punto del territorio provincial.”

De más está decir que no se obtuvo ningún tipo de respuesta por parte del Auditor

Si llegó a la Defensoría del Pueblo una respuesta del titular de la Comisaría de Gral. Conesa pidiendo explicaciones respecto de la seguidilla de “hechos desafortunados” aludidos por la Defensoría del Pueblo en uno de sus requerimientos. Estos hechos estaban directamente relacionados con las actuaciones judiciales caratuladas “RIQUELME, Víctor Daniel S/ Abuso de Arma de Fuego” (víctima Manzano, Lucas) y “MANZANO, Roxana S/ Denuncia” (víctima Grillo, Alan), con relación a las cuales el propio Comisario había remitido los respectivos informes al Sr. Jefe de la Unidad Regional Primera con fecha 11/06/09 (Exptes. N° 485 y 540/09 DPRN).

Muertes.

Por otra parte siguen las muertes en Comisarías y Cárceles, aunque, afortunadamente, pareciera que va en descenso ya que el año pasado murieron más (este año sólo tres). Repasemos los títulos:

- “Murió una mujer en una comisaría de Roca” (Diario Río Negro, 11-06-09)
- “Ahorcado en un calabozo de Lamarque” (Diario Río Negro, 31-07-09)
- “Investigan muerte de un interno en la cárcel de Roca” (Agencia ADN, 24/08/09)

Esta es, Sr. Presidente, Sres. Legisladores, la “Política del Gobierno Provincial” en materia de Derechos Humanos que acaban de ratificar días atrás el recientemente designado Ministro de Gobierno y la Subsecretaria de Derechos Humanos, que depende precisamente del propio Ministerio de Gobierno al igual que la cuestionada Policía Provincial.

Debo advertir que nunca vino un funcionario del Poder Ejecutivo, ni siquiera un Legislador a preguntar sobre las violaciones a los Derechos Humanos que denuncia la Defensora del Pueblo, a mostrar su preocupación, a solidarizarse, a proponer estrategias de trabajo conjunto, a preguntar si la denuncia ya estaba en la justicia, si había algún tipo de acompañamiento a las víctimas o a sus familiares, nunca Sr. Presidente, nunca Sres. Legisladores

Sumarios administrativos por enfermedad (inconclusos)

También resulta violatorio de los Derechos Humanos más esenciales el trato inhumano y las humillaciones que siguen padeciendo muchos empleados y sus grupos familiares.

Hablo de actuaciones sumariales inconclusas, iniciadas hace años, juntas médicas postergadas, reducción o supresión total de haberes y ascensos postergados, entre otras peripecias que deben soportar los agentes.

Entre los casos más graves podemos mencionar:

- Policía lesionado en acto de servicio en el año 2003 ha hecho infinidad de trámites y gestiones, todos sin resolución favorable. En un principio no se reconocieron las lesiones como relacionadas con acto de servicio, porque del accidente informaron a la ART un año y 4 meses después. ERROR ADMINISTRATIVO. En noviembre de 2009 se cumplieron seis (6) años con certificado médico en forma ininterrumpida. Permanece en situación pasiva desde el año 2005. Situación económica desesperante. Dificultades motrices y secuelas que podrían haberse evitado con un tratamiento de rehabilitación oportuno que no pudo hacer por negligencia administrativa. Tratamiento psicológico prolongado. Conserva el estado policial y el arma reglamentaria. Continúa el calvario a pesar de haber obtenido un reconocimiento del accidente como relacionado con el servicio y una incapacidad del 80 %. El expediente va y viene de la Jefatura a la Unidad Regional 2º pero no se resuelve.

- Oficial inspector de Gral. Roca, sumario y trámite inconcluso relativo a un retiro por discapacidad. El Dictamen de Junta Médica estableció Discapacidad del 70 % relacionada con actos de servicio hace más de dos (2) años. Tratamiento psicológico. En enero de 2007 pierde la posibilidad de ascenso a Oficial Principal. Respuesta de la Jefatura: "Actualmente con proyecto de decreto..." (Junio de 2008). Hasta el día de la fecha no se resolvió su retiro.

- Policía de Gral. Roca con tratamiento psicológico por acoso laboral desde el año 2007. Hace un año que padece retención total de sus haberes. Padre de familia. Junta Médica dictaminó Incapacidad del 70 %. El trámite de retiro no avanza.

Quiero reiterar un dictamen revelador de un médico psiquiatra del Alto Valle, a quien le ha tocado asistir profesionalmente a muchos de estos policías que padecen una situación como la descrita: Se transcriben algunos párrafos:

"... En los últimos años ha tenido una hoja de servicio intachable con 10 excelente hasta el año 2002... Las dificultades con la institución policial se dan a partir del 2001 cuando solicita una entrevista con psicóloga institucional

manifestándole ideas de suicidio, fenómeno que origina un conjunto de acontecimientos encadenados de interpretaciones autoreferenciales de perjuicio, justo en un ambiente como la policía que solo tiene recursos punitivos y no de dialogo para resolver conflictos... escalada de conflictos que culmina con el apartamiento del paciente de tareas específicas, pasando a realizar tareas subalternas que para él tenían un carácter degradante que agravó su conflicto con la institución respondiendo esta nuevamente con sus limitados recursos ya conocidos... Su personalidad decidida combativa fue funcional y útil a la institución ... Las características de desprotección institucional que es habitual sobre la suboficialidad determinó un elevado grado de desamparo como también es habitual para él y otros suboficiales que terminan con este elevado nivel de stres laboral. La estructura no obra como un cuerpo de protección sobre los subalternos y esto en un ámbito de organización piramidal sin derechos a replica o diálogo, terminó con su capacidad de tolerancia y la frustración vivida como injusticia fue responsable eficiente comprensible y entendible desde todo punto de vista psicológico para todos sus desajustes posteriores... Por todo lo anterior, aun los desbordes considerados paranoides y bordelain los considero vinculados y dependientes directos de la actividad que desempeñó profesionalmente como policía y sobre todo de la confrontación asimétrica del paciente con la institución... Huergo 1 de febrero de 2008". (fdo.) N. R. A. Medico Psiquiatra.

Expediente nº 350/08 "S/ situación de policías de Bariloche"

Respecto de la situación de los doce policías de San Carlos de Bariloche sumariados y sancionados con cesantía por la presunta comisión de actos de indisciplina (reclamo laboral). Todos absueltos en causa penal, denunciados que fueran por el delito de sedición, destacando que del presunto acto sedicioso fueron más de cuarenta los efectivos que participaron, desconociendo el motivo de por qué sólo estas doce personas terminaron cesanteadas.

A partir de Julio de 2007 dejaron de percibir su salario y fueron privados de la obra social provincial. Además, desde la Jefatura se les negó autorización para ejercer alguna actividad laboral con miras a satisfacer las necesidades alimentarias básicas de sus grupos familiares. Estado de necesidad extrema que los obligó a demandar judicialmente al Estado Provincial.

Expte. Nº 20807/08, Cam. Lab. Bche. Autos: "MILLAPI, Benito Gregorio y Otros c/ POLICIA PCIA. RIO NEGRO S/ Contencioso administrativo"

Afortunadamente la Cámara Laboral de Bariloche, el pasado mes de Abril los liberó de la inhabilidad que les había impuesto el Jefe de la Policía para ejercer otras actividades laborales. De esta forma, en lo sucesivo pudieron procurar su supervivencia y la de sus grupos familiares. Cuestión elemental de humanidad.

En el marco de este juicio contra la Provincia, sorteados todos los obstáculos y las maniobras dilatorias y obstruccionistas puestas de manifiesto por la Jefatura de Policía, la demanda fue notificada y el Tribunal pudo fijar una audiencia de conciliación.

Celebrada la audiencia y ante el fracaso de la misma (obviamente el Estado no mostró intenciones de conciliar posturas), comenzaron a incorporarse a la causa

elementos probatorios incontrastables a favor de los demandantes (piden la reincorporación a sus puestos de trabajo).

El testimonio del Subcomisario Luis Jara resulta revelador. Del mismo puede inferirse que la decisión de expulsarlos de la Fuerza podría resultar exagerada y que no se justifica haberlos sometido a semejantes vejaciones, cuyas consecuencias dañosas resulta difícil determinar y cuantificar.

Habría declarado, entre otras cosas, que en el procedimiento administrativo llevado a cabo contra los actores no se hablaba de “toma de la comisaría”, reconociendo por otra parte que el policía no se destaca por tener un buen pasar, y que en Bariloche algunos factores se potencian, por lo que tienen la necesidad de hacer adicionales, y que “la situación era bastante precaria en ese momento”. Habría realizado además una autocrítica al sostener que “los mandos medios nunca hemos planteado algo para solucionar las dificultades de los suboficiales”.

Merece un reconocimiento por su valentía, por su entereza, y porque bajo una conducción tan verticalista como la de la Policía Provincial, muchos agentes (incluidos miembros de la Plana Mayor) temen formular las mínimas insinuaciones de desacuerdo o voluntad de cambio. Máxime cuando la actual conducción se encuentra sospechada de groseras irregularidades, tal como lo he venido sosteniendo en los sucesivos informes.

También en el marco de este juicio, tuve la oportunidad de contestar un oficio al Tribunal donde expuse mi visión sobre la situación injusta padecida por estos policías, hoy expulsados, resultando llamativo que el denominador común de todos ellos es que se trata de personal instruido, capacitado, con muestras sobradas de honestidad y aptitud para la toma de decisiones, vale decir potenciales cuadros de conducción de la Fuerza.

Casos de violación en Bariloche.

Otro tema que motivó la intervención de la Defensora del Pueblo fueron los reiterados casos de violencia y ultrajes a mujeres en la ciudad de San Carlos de Bariloche, materializados algunos en abusos sexuales y violaciones.

A tal efecto se cursó un amplio pedido de informe al Ministro de Gobierno, sugiriendo particularmente, y dada la gravedad de los acontecimientos, se instruya al Sr. Jefe de la Policía Provincial para que se constituya en la localidad en forma personal y por el tiempo que resulte necesario, a los fines de interiorizarse de la situación, desplegar todos los recursos necesarios para la investigación que le compete, disponer sin mayores dilaciones la adopción de medidas eficaces de prevención, así como la máxima disposición en cumplimiento del rol de Auxiliar de la Justicia que la Fuerza Policial constituye. Afortunadamente, el caso parece haberse resuelto, aunque no por la labor específica desplegada desde la Policía Provincial.

El caso de Gabriel Ormeño.

Siguiendo con las violaciones a los Derechos humanos, podemos mencionar que el caso del Oficial Gabriel Ormeño, también resulta revelador de los abusos

de autoridad y poder de la conducción de la Fuerza, permitiendo visualizar además otras vinculaciones e irregularidades.

Cabe recordar lo manifestado por la jueza Marisa Bosco en el marco de la investigación administrativa que lleva adelante esta Defensora del Pueblo:

“...El Oficial Gabriel Ormeño se encuentra cumpliendo funciones como empleado comisionado a pedido de la suscripta... desde el 29-11-07... El Sr. Jefe de Policía fue anoticiado mediante nota ... conforme lo conversado telefónicamente, y se le envió vía fax copia de las referidas notas remitidas a la Unidad 8va y Unidad Regional IV, informando de las comisiones judiciales a las que se encontraba afectado (Ormeño)... Que en fecha 26-05-08 ... se le inicia al empleado (Ormeño) por orden del Jefe de la Policía de Río Negro, actuaciones sumarísimas para investigar la presunta comisión por falta disciplinaria gravísima (abandono de servicio)... Es decir que se le inician actuaciones sumarísimas por abandono de servicio cuando se encontraba obedeciendo una orden Judicial... Orden que como mencionara precedentemente no podía desobedecer so pena, de incurrir en una falta gravísima y aun más en la comisión de un delito en el caso previsto en el Artículo 248 del Código Penal de la Nación... Desde los distintos estamentos policiales a quienes se les notificara de las distintas comisiones dispuestas por las suscripta, la actitud fue de entorpecimiento a la designación que la suscripta efectuara conforme se indicara precedentemente...”.

Sin embargo, desde la Jefatura de Policía han desmentido la existencia de tales comunicaciones efectuadas, con el ánimo de continuar indefinidamente privando a Ormeño de la percepción de sus haberes, con el consecuente padecimiento material y psicológico que para su grupo familiar ello importa.

La situación del Jefe de la Policía.-

Relacionado con el tema del Oficial Gabriel Ormeño, quiero informar que el Sr. Jefe de la Policía Provincial, se encuentra involucrado en una nueva investigación penal, esta vez denunciado que fuera con fecha 30 de enero de 2009 por el ex Auditor Judicial General, Dr. Gustavo Martínez. (ante la Fiscalía de Turno de Viedma).

Me permito brindar algunos detalles (con transcripción de algunos de sus párrafos) porque la situación resulta ya de público y notorio conocimiento.

*“Viedma, 30 de Enero de 2009... El expediente tuvo inicio con la nota que remitiera el Señor Ministro de Gobierno de la Provincia... el día 4 de Diciembre de 2008... al Señor Presidente del Consejo de la Magistratura... “Este Gobierno es el principal interesado en que las causas relacionadas a delitos de trata de personas transiten dentro de los parámetros legales inobjetables a efectos que no queden impunes los involucrados en tales aberrantes hechos” ... La Dra. BOSCO brinda un acabado informe de los trámites cumplidos en el expediente Nº 14740... así como también de las comunicaciones habidas con sus autoridades y otras circunstancias que acreditan que tanto la Jefatura (Crio. Cufre) como anteriores autoridades de Seguridad (Dra. Nadia Ruiz), estaban al tanto de la causa y la existencia de oficiales y personal involucrado... Advierte no obstante que **de los oficios cursados a la Policía surgía si que los hechos que se investigaban e involucraba a personal de la Fuerza de Seguridad,***

eran corrupción de menores de edad, facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, promoción y facilitación de la prostitución o corrupción de mayores de edad, proxenetismo, rufianería, trata de menores de 18 años, incumplimiento de los deberes de funcionario público... Recibe una nueva nota del Señor Ministro de Gobierno datada el día anterior, por la que manifiesta que "...en virtud de lo conversado personalmente con la Dra. Bosco en una reunión mantenida en el día de ayer, consider (a) innecesaria la continuación de la investigación preliminar solicitada"...

... Habiéndome abocado al conocimiento de la causa... Hecha esta síntesis de los antecedentes del caso y señalización de las diligencias cumplidas... La cuestión queda plenamente exteriorizada y encuentra recién remedio -al menos en principio- con la Nota Nº 2/09 que cursa el Sr. Ministro al Jefe Víctor Cufré (fs. 140), tras advertir que tras el informe de éste y pese al tiempo transcurrido "no surge que se hayan iniciado actuaciones sumarísimas a los referidos... Expresa que "este Ministerio requiere el inicio inmediato de las actuaciones sumarísimas correspondientes a tenor de lo dispuesto por los arts. 3 dec. 32/94 y 73 inc. D del decreto 1994/94"... **Las ex autoridades de Seguridad y el Comisario Cufré... ni iniciaron actuaciones sumarísimas...ni mucho menos adoptaron las medidas preventivas más elementales...** Pero en realidad la cuestión se advierte mucho más grave, ya que desde la propia Jefatura de Policía... se procura impedir que el oficial ORMEÑO que fue comisionado por la Sra. Juez en la investigación de la causa se aparte o no colabore con la Juez²... **El caso de Ormeño no tiene parangón. Exhibe además de un increíble abuso de autoridad por parte de la Jefatura de Policía que conocía la decisión jurisdiccional de comisionarlo, una conducta que es factible de considerarse penalmente reprochable y respecto de la que solo pecando de muy ingenuo podría pensarse que no busca bajar líneas como comúnmente se dice...** No es posible que el Jefe de la Policía no tenga en claro que un funcionario policial no puede oponerse a una decisión jurisdiccional y, que de hacerlo, no tiene otra vía que la de cuestionarla en el ámbito correspondiente. Ormeño está imposibilitado de incumplir la orden de la Juez, como también Cufré no puede en modo alguno oponerse por vías de hecho a que aquel cumpla con el mandato policial. **Esto es algo muy elemental. No registro casos en que se haya seguido una línea de acción como la que se postula desde la Jefatura de Policía; ni siquiera durante la última dictadura militar...** Las circunstancias apuntadas que justificarían el inicio de nuevas actuaciones penales, remitiendo copia de la presente a sus efectos, entiendo que debería ponerse en antecedentes de la situación al Señor Ministro de Gobierno que así lo ha requerido, como al Gobernador de la Provincia de quien

² Con fecha 12 del corriente mes el Subjefe Crio. DUTRA, dispone iniciar actuaciones sumarísimas contra el oficial ppal. Ormeño que se encuentra comisionado por la Juez de Instrucción para el cumplimiento de sus instructivas en el marco de la señalada causa penal. Habíamos visto que el Jefe Cufré ya hace más de medio año dispuso otras actuaciones sumarísimas con retención total de haberes en lo que constituye un precedente que no recuerdo siquiera se haya dado durante la Dictadura Militar, y ahora le inician otras nuevas por haber reclamado y dado a conocer su situación ante la Defensora del Pueblo y los medios de comunicación en el marco de lo que no puede juzgarse sino como el ejercicio de los elementales derechos de expresión, petición y defensa frente a tan groseras afrentas a sus derechos y el de su familia incluyendo los hijos menores material y afectivamente a su cargo.

*depende el Jefe de la Policía, así como **también a la Legislatura Provincial al advertirse la necesidad de una urgente y pronta revisión de la Legislación que regula el accionar de la Policía Provincial y de las facultades de la Jefatura, incluyendo particularmente las disciplinarias, que notoriamente contradicen derechos, garantías y principios constitucionales básicos resultando en muchos aspectos repugnantes al sistema democrático y contrarias al nuevo orden normativo...** (fdo) Gustavo Adrián Martínez (Auditor Judicial General).*”.

A modo de conclusión

Vale decir que el Jefe de la Policía no sólo estuvo involucrado con la supuesta salida irregular el 31/12/07 de uno de los imputados en el crimen de Ana Zerdán, razón por la cual fue imputado y tuvo que prestar declaración indagatoria.

Además de ello, y con motivo de sus declaraciones públicas hechas contra mi persona, fue querellado por calumnias e injurias, juicio que se encuentra en trámite y a cuya audiencia de conciliación convocada por el Juez, el Sr. Jefe de la Policía no compareció.

Cabe recordar que el jefe de la Policía también intentó pedir mi desafuero y querellarme por calumnias e injurias, allá por el mes de abril de 2008, según dijo, por haber realizado imputaciones “falsas y desacreditantes” hacia su persona, demanda que nunca concreto.

El 8 de Diciembre de 2008, en ocasión del acto oficial del Día de la Policía celebrado en Las Grutas, el Sr. Jefe de la Policía tuvo el “desatino” (según palabras del propio Ministro de Gobierno) de invitar a la cena a uno de los imputados por el asesinato de la bioquímica Ana Zerdán. Conducta reprochable que generó duras críticas de la opinión pública.

En la causa que investiga el delito de trata de personas con policías involucrados (Juzgado de Choele Choel), la jueza le pidió al fiscal que investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o la obstrucción a la labor de la justicia, por parte del actual Jefe de la Policía, que se habría perpetrado a partir de la decisión del traslado y posterior sumario administrativo (ante la negativa) en contra del oficial subinspector, principal colaborador de la jueza en la investigación. Aclaro que esto es anterior (aunque guarda conexidad) al informe ut supra referenciado del ex Auditor Judicial General.

En el juicio de los policías de Bariloche cesanteados, se solicitó una medida cautelar para que se restituya la obra social provincial a los trabajadores despedidos. La medida no podía hacerse efectiva por la negativa reiterada de la Jefatura de Policía de contestar los tres oficios judiciales que se habían librado. A partir de ello, el Tribunal solicitó se giren las actuaciones al fiscal en turno para que instruya una causa penal por desobediencia (art. 239 Cód. Penal).

Sr. Presidente, Sres Legisladores, en cualquier provincia donde se respeten las Instituciones, por sólo uno de estos antecedentes que acabo de mencionar, hubiera correspondido disponer la desafectación preventiva del Jefe de la Fuerza. Y no hablo de pedido de renuncia, sino de desafectación del servicio en los términos de la ley 4200 (modificatoria de la ley del Personal Policial, N° 679).

Sin embargo, pareciera que cada vez estamos más lejos de que se cumplan los preceptos legales.

Por último, quiero recordar alguna reflexión de mi informe anual anterior.

Estamos ante una Policía conducida en forma personalista y absolutamente discrecional, tanto en lo que hace al accionar interno como externo de la fuerza.

El Jefe de la Fuerza no se referencia, es decir no responde a sus jefes constitucionales y legales. No muestra apego a las normas de nuestro estado de Derecho ni a los principios de ética y moral que deben regir su accionar.

Las cuestiones personales del Jefe de la Policía se imponen sobre la corrección y el decoro que exige su investidura.

Existe a mi entender una descomposición que se profundiza hacia adentro en la cadena de mando. El Jefe protege y privilegia a determinados policías, y persigue y margina a otros, según respondan o no a su estrategia personal. Esto está provocando un malestar interno que se consolida día a día y que puede traer aparejadas graves consecuencias de implosión dentro la Institución.

Resulta abrumadora la cantidad de policías condenados penalmente.

Y lo más grave es que cuando se condena a un policía con la pena accesoria de inhabilitación, en franca violación de la legislación vigente (art. 119, inc. f. de la ley del personal policial Nº 679), se lo mantiene dentro de la Fuerza en situación pasiva o bien cumpliendo tareas en alguna comisaría. Vale decir que no se cumple con las sentencias de los jueces, no se toma razón de sus efectos jurídicos y consecuencias sancionatorias para los condenados.

Personas privadas de su libertad

Reclamo de Internos de la Alcaidía de Viedma por condiciones generales.

Un grupo de internos de la Alcaidía local hizo llegar un reclamo en donde manifestaron que habitan en condiciones deplorables de mantenimiento edilicio. Además de ello expresaron que las condiciones de asistencia de elementos de uso personal, así como el régimen de visitas es inconveniente tanto para ellos como para sus familiares.

La misma presentación fue remitida al Superior Tribunal de Justicia.

Desde esta Defensoría del Pueblo se solicitó al Sr. Subsecretario de Política Criminal un informe acerca de las intervenciones correspondientes que atiendan al caso, informe que no ha sido respondido al día de la fecha, pese a las correspondientes reiteraciones.

Otras presentaciones de personas privadas de libertad y de sus familiares que expresaban la necesidad de pasajes para mantener contacto con los mismos, ser asistidos por sus letrados, averiguación de sus expedientes judiciales, provisión de alimentos, y elementos de limpieza, solicitud de traslado a otras unidades penitenciarias. De las actuaciones se corrió traslado al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, a la Subsecretaría de Políticas Criminales, y se

tomó contacto con Defensorías Oficiales donde tramitan las causas de los internos.

Teniendo en cuenta la sentencia del Juzgado de Instrucción N° , de la Primera Circunscripción Judicial, en autos caratulados “Internos Ejecución Penal N° 1 S/ Habeas Corpus”, Expte N° S8-09-0201, de fecha 3 de marzo de 2009, que ordena al Jefe del Establecimiento de Ejecución Penal I “la provisión del suministro de alimentos y elementos de limpieza...(y) utensilios para la ingestión de alimentos...”, y en el marco de las actuaciones de uno de los internos de ese establecimiento, es que se solicitó informe en relación al cumplimiento de esa orden judicial.

La respuesta recepcionada desde la Subsecretaría de Política Criminal, da cuenta de que “la dieta equilibrada y variada se elabora en la cocina del establecimiento. El desayuno está a disposición de los internos pero pocos la aceptan porque no se levantan a desayunar, pero igualmente se ha implementado la metodología de elaboración de infusión de yerba mate en la cocina del anexo de encausados por parte de los mismos internos. Asimismo se informa que los internos pueden recibir ciertos alimentos del exterior, de acuerdo a la reglamentación vigente...”, “El racionamiento destinado para el sector encausados llega en buen estado, ya que se ha implementado la utilización de un tupper para su mejor racionamiento y protección de contaminación...”

En relación a los artículos de limpieza la información indica que se entregan cada diez días.

En lo referente a las visitas de familiares provenientes de larga distancia se afirma que se han efectuado contemplaciones, y que siempre que el espacio físico y la conducta del interno lo permita se otorgan visitas excepcionales.

Respecto al **peculio** se informa que el mismo “no está implementado en la actualidad, toda vez que si bien se encuentra contemplado en la Ley 4283, la misma no ha sido reglamentada en materia peculio y menos aún se ha asignado la reserva presupuestaria correspondiente...” No obstante ello se pone en conocimiento que se desarrollan en los penales de la provincia distintos talleres que tienen por finalidad capacitar a los internos para prepararlos para una adecuada reinserción social.

Por otra parte, en lo atinente a la infraestructura edilicia se señala que se han efectuado reparaciones para mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad en el sector Encausados.

De la respuesta recepcionada se corrió traslado al interesado quien sostuvo la necesidad de que se arbitren las medidas pertinentes para que se asista adecuadamente a las personas privadas de libertad, en condición de procesados, alojados en la Cárcel de Encausados.

En este mismo sentido, al cierre de este informe se recepcionó la solicitud de un ciudadano bajo libertad condicional que peticionaba colaboración en la

búsqueda de trabajo, dando cuenta de la angustiante situación en que se encuentra en su etapa reciente de externación.

Jóvenes en situación de conflicto con la ley penal

A partir de disturbios ocasionados en el Instituto Pagano de Viedma, se realizó una visita a ese Hogar. No se encontraba ningún joven en la institución debido a que los mismos habían sido re ubicados en otros centros. Durante la inspección se pudo tomar contacto con las necesidades de los operadores que asisten a los jóvenes.

Siendo así se solicitó de la Subsecretaría de Promoción Familiar informes acerca de la contención de los jóvenes. Esta Subsecretaría remitió el cronograma de asistencia a los chicos, como así también los proyectos de reforma de los estatutos con el fin de actualizar los mismos a las necesidades de los jóvenes y de los operadores que los asisten.

Restricción de la libertad de jóvenes en Comisaría

Se recepcionó la presentación de una madre que expresaba la situación que vivieron sus hijos en una Comisaría de Viedma, con motivo de ser demorados por agentes policiales en la vía pública.

En virtud de la presentación se petitionó informe al Comisario en Jefe de esa Unidad, acerca del Personal policial que actuó, horario en que los mismos fueron demorados, horario en que se dio aviso a la Guardia de Promoción Familiar, al Juzgado en turno, y disposición de la entrega a sus padres.

Por otra parte se requirió informe acerca si esa Comisaría había sido notificada de la resolución N° 887 de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, de fecha 3 de octubre de 2008 en la que se instruyó a las fuerza de seguridad a adecuar su actuación en los casos de restricción de la libertad ambulatoria de personas menores de 18 años de edad conforme estándares establecidos en normas internacionales de derechos humanos y la sentencia recaída en el caso “Bulacio vs. Argentina”.

La respuesta recepcionada detalló los conceptos requeridos, como así también el Comisario dijo que se estaban aplicando las normas de protección de menores conforme la resolución mencionada. Este informe se puso en conocimiento de la madre, quien decidió no continuar con las actuaciones, pero petitionó que se cumpliera con las normativas de protección de niños niñas y adolescentes demorados en comisaría.

Esta Defensoría del Pueblo entiende necesario recomendar la aplicación de la normativa existente en relación a la restricción ambulatoria de los jóvenes en unidades policiales de nuestra provincia como así también se ajusten los mecanismos de procedimiento ante una detención a fin de evitar toda posible vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

CASO FLAVORS

Hemos destacado en todas las oportunidades a nuestro alcance las dudas e interrogantes AUN VIGENTES respecto del origen de los productos licitados, distribuidos y consumidos por años en los hogares mas necesitados de nuestra Provincia, en el marco de los Programas “Comer en Familia” y “Comedores Escolares y Desayuno y Merienda Escolar”, llevado adelante por el Ministerio de la Familia en coordinación con el Ministerio de la Salud en sus competencias específicas. (Exp. 767/08. Denuncias varias a Empresa Flavors y Cía.)

Hemos recorrido un largo camino en la búsqueda de encontrar los orígenes de los productos distribuidos por la empresa Flavors & CIA S.A., circunstancia que aún es una incógnita a pesar de la obligación legal de la empresa al respecto³.

Agotamos la instancia en la Provincia de San Luis, donde acreditamos la baja de los productos por Resolución 773/07 del Ministerio de Salud de esta Provincia de manera absolutamente irregular, según todas las fuentes consultadas.

Quedando solo la Provincia de Mendoza, nos constituimos en el Departamento de Higiene de la Alimentación del Ministerio de Salud, encontrándonos que las materias primas por ellos inscriptos allí, se hallan vencidas desde hace varios años, y visitada la planta constatamos que se encuentra cerrada y en Mega Concurso de Acreedores.-

A pesar de la mencionada baja, NUNCA SE DIERON DE ALTA EN LA SECCIONAL Río Negro del R.N.P.A. pasando al anonimato evitando todo control del estado.

Lo que es más grave, se desconoce también el origen de la materia prima utilizada para fraccionar / mezclar, con lo cual se encuentra toda la cadena en la marginalidad o “en negro”, y sin control del Estado, el mismo que luego lo adquiere.-

A pesar de ello, sorteaban habitualmente TODO control administrativo de sucesivos Ministerios, Secretarías, Direcciones, Órganos de Contralor, etc., incluso luego de que la Defensora del Pueblo en persona, lo pusiera de resalto en el marco de la apertura de sobres correspondientes a las Licitaciones 60/08 y 61/08 del Ministerio de la Familia.

Finalmente a partir del contundente informe del I.N.A.L. realizado a nuestro requerimiento, se destacaba a los productos como no aptos para el consumo, por constituir “*un riesgo probable en la salud*”; derivando en el Decreto 1079/08 (P.E.) que dio de baja a las empresas de Registro de Proveedores del Estado

³ Artículo 51 inc a) del Dec. Prov. 188/04 “...deberá presentar: El origen de los productos licitado...”

rionegrino por considerar que *“significa que existe una probabilidad Razonable de consecuencias adversas y temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores”* (apartado 7 del mismo).

Omitió acompañar antecedentes bancarios que acrediten su solvencia, paralelamente pretendió justificarla con un informe de Nación Factory, quién resulta ser la mesa de dinero donde descontaban los créditos otorgados por el Estado Provincial a través de Tesorería. En su caso el que acreditaba solvencia, paradójicamente en la realidad que vivimos, era la Provincia de Río Negro.-

Destacamos la insolvencia económica -hoy transformada en una empresa fallida- a partir de poseer 235 cheques rechazados por la suma de \$ 7.516.888,88 según constancias de la Central de Deudores del Sistema Financiero; administrada por el Banco Central de la República Argentina; todo ello solo entre el año 2007 y 2008.

Proveyeron por años al Estado Provincial sin la autorización del síndico del concurso de Masily S.A, burlando de esta forma a sus acreedores.

La empresa fue sancionada por el Ministerio de Trabajo Provincial (Res. 064/08) por la comisión de fraude laboral a través de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraqueros Ltda.; circunstancia que se encuentra investigando la justicia federal de primera instancia de la ciudad de Viedma a partir de la eventual comisión del delito de Evasión Impositiva Agravada (art. 2, 8 sig. y cctes. de la ley 24.769).-

A pesar de todo lo expuesto, circunstancias perfectamente constatables por que así lo hemos hecho, fue beneficiaria de exenciones impositivas por sumas millonarias, a partir de ser “supuestamente” elaboradora alimentos en la Provincia, que como consta en las actuaciones no ocurría en la planta de General Conesa (por no encontrarse habilitada al efecto) y si lo fue, ello era absolutamente irregular.- La inscripción en el Registro Nacional de Empresas radicado en nuestra provincia, fue como FRACCIONADORA.

Todo lo dicho fue puesto en conocimiento en sucesivas notas, recomendaciones, impugnaciones, en diferentes ámbitos de Poder Ejecutivo Provincial, especialmente al momento de la apertura de las licitaciones 60/08 y 61/08 de los programas citados, todo lo cual no viene al caso traer aquí dado que consta en las actuaciones, sin obtener respuesta satisfactoria.-

Como corolario destacamos que resaltamos, explicamos y acreditamos la maniobra realizada a través de la intervención de sucesivos Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y dependencias varias, tendientes a armar un esquema de contratación de alimentos, que entendemos tenían como único fin succionarle recursos económicos –dinero- al Estado Provincial mediante la adquisición de productos, sin la debida calidad, origen, acreditaciones, controles y/o certificaciones mínimas que debe contener un alimento destinado al

consumo humano. Con el agravante de que aquí se destinaban a los ciudadanos más necesitados, incluidos en los programas citados.-

La maniobra denunciada perjudicó directamente el patrimonio del Estado Provincial por sumas millonarias, con la compra de productos que lejos estaban de ser de las características que se pagaban, en beneficio exclusivo de la entonces proveedora Rocafe; luego Masily SA y finalmente Flavors & Cia S.A.. y/o sus directivos involucrados en nuestras denuncias, con un único apoderado en común el Sr. Daniel Fernández .

Paralelamente se afectó la salud de la población asistida, incluso con serias probabilidades de ser irreversibles, de todo lo cual en nada repercutirá en las arcas de la empresa, hoy quebrada y sin bienes conocidos. Consecuente con ello, solicitamos constituirnos en la causa judicial a los efectos de que se determinen el colectivo de beneficiarios de los programas cuestionados para que se repare los daños causados en su carácter de consumidores de bienes y servicios adquiridos a través del Estado en cumplimiento de sus fines; todo ello más los intereses del caso, con costas.

Consideraciones de los hechos.

Los procedimientos de contratación realizados para lograr la maniobra mencionada, debieron contar necesariamente con omisiones y desatenciones en los procedimientos de contratación, ejecución y pagos, los cuales minaban la transparencia que deben tener los actos públicos.

Los hechos denunciados, cualesquiera que sea su calificación legal o los variados tipos penales susceptibles de subsumirse, encuadran claramente en los denominados “hechos de corrupción” que son la consecuencia del obrar irresponsable, negligente o inescrupuloso de quienes tienen a cargo la administración de los bienes públicos, sea por acción o por omisión.

La corrupción ha sido definida como *“toda conducta que se desvía de los deberes normales inherentes a la función pública debido a consideraciones privadas, tales las familiares, de clan o de amistad, con el objeto de obtener beneficios personales, en dinero o en posición social”*. También como la *“violación del interés público para obtener ventajas especiales”*, o la *“conducta ilícita utilizada por individuos o grupos para obtener influencias sobre las acciones de la democracia”*.

En términos generales la corrupción implica la utilización del poder de decisión en forma desviada, sea por parte del funcionario o de una autoridad que tenga facultad de decisión.

La corrupción lesiona la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos. En la faz social, constituye un serio riesgo sobre valores esenciales como la vida, la igualdad, la salud, la educación y la seguridad, pues atenta contra las bases del bienestar de la población que ve desnaturalizada la esencia de la función estatal. Es considerada también como la cara más viable de la macro victimización

económica y “la contracara de los derechos civiles y políticos garantizados por las constituciones democráticas”, pues porta en sí misma la discriminación, la desigualdad de trato, al ser fuente de apropiaciones abusivas o, por extensión, origen de prácticas que suprimen o debilitan la transparencia, la libre competencia y la libertad de contratación, en perjuicio de los bienes públicos y privados.

La tolerancia a ciertas (y crecientes) prácticas corruptas suscita a la vez mayor desconfianza hacia el Estado, sin entrar a considerar que no es sólo éste el ámbito preponderante de tales prácticas, sino que la corrupción atenta igualmente contra los derechos económicos y sociales. Cuando se habla de mercado, se piensa inmediatamente en otros derechos que los derechos civiles y políticos, como los llamados derechos sociales y económicos, siendo sin embargo que la corrupción ataca también a éstos últimos (por ejemplo, cuando lleva a un estado o sus entes a realizar contrataciones innecesarias, pagar precios superiores a los de mercado, ejecutar obras inútiles, otorgar privilegios, etc).

Los efectos perniciosos de la corrupción la convierten en una amenaza para la sociedad democrática y el Estado de Derecho, pues debilita la fuerza de todas las normas establecidas por los poderes públicos y propicia circunstancias que alientan a los funcionarios públicos a situarse por encima de la ley. Además, debilita dos de los pilares que sustentan a todo Estado moderno: los derechos fundamentales y la confianza en que se basa el mecanismo de representación democrática. De esta manera se diluye la distinción necesaria entre lo público y lo privado, extendiendo sus efectos sobre el ejercicio del poder y golpeando por igual a partidos políticos, funcionarios y jueces, legalizando la ilegalidad y relajando las garantías que, en casos extremos, se convierten en meras ficciones.

La realidad de Argentina, incluida nuestra Provincia nos eximen de explayarnos, como la corrupción o las malas administraciones gubernamentales han incidido en el alto nivel de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la cual es directamente proporcional al índice de percepción de la corrupción.

En este sentido Juan Rodríguez Estévez, siguiendo el modelo económico del crimen expuesto por Becker, asevera que un delincuente comete un crimen solamente si los beneficios esperados de hacerlo exceden sus costos. Por ello, dice dicho autor, si la probabilidad de condena se interpreta como efecto disuasivo, el eficaz funcionamiento del sistema judicial es decisivo a la hora de evaluar las repuestas del Estado frente a los delitos de corrupción. La probabilidad de ser descubierto y sancionado actúa como un indicador de desaliento. Eso depende esencialmente del sistema judicial.

RECEPTORÍA DE VILLA REGINA

Durante el año 2009 y desde la receptoría de la Defensoría del Pueblo hemos recibido un total de 253 reclamos, y se han atendido a 1583 personas por diversas consultas.

Algunos de los reclamos han sido derivados a la sede central del organismo en la ciudad de Viedma y otros han sido tramitados en la ciudad de Villa Regina.

Los temas de los reclamos se relacionaron con: Anses, Bomberos, CODECI, IPPV, trámites de filiación, telefonía, cuestiones municipales, mutuales y obras sociales, salud pública, rentas, seguridad y por último, plan frutícola integral.